

AMERICA LATINA *en movimiento*

470



noviembre 2011

Centroamérica en el huracán de la globalización



**GRITO de los
EXCLUIDOS**

alai

AMERICA LATINA *en movimiento*

470

noviembre 2011
año XXXV, II época

Publicación internacional
de la Agencia Latinoamericana
de Información

ISSN No. 1390-1230

Director: Osvaldo León

ALAI: Dirección postal
Casilla 17-12-877, Quito, Ecuador

Sede en Ecuador
Av. 12 de Octubre N18-24 y Patria,
Of. 503, Quito-Ecuador
Telf: (593-2) 2528716 - 2505074
Fax: (593-2) 2505073

URL: <http://alainet.org>

Redacción:
info@alainet.org

Suscripciones y publicidad:
alaiadmin@alainet.org

ALAI es una agencia informativa, sin
fines de lucro, constituida en 1976
en la Provincia de Quebec, Canadá.

Las informaciones contenidas en esta
publicación pueden ser reproducidas
a condición de que se mencione
debidamente la fuente y se haga
llegar una copia a la Redacción.

Las opiniones vertidas en los artícu-
los firmados son de estricta respon-
sabilidad de sus autores y no reflejan
necesariamente el pensamiento de
ALAI.

Suscripción (10 números anuales)

	Individual	Institucional
Ecuador*	US\$ 28	US\$ 33
A. Latina	US\$ 60	US\$ 80
Otros países	US\$ 75	US\$ 130

* incluye IVA

Cómo suscribirse:

www.alainet.org/revista.phtml

Artes Gráficas SILVA, Quito, 2551-236

Ilustración:

Pavel Egúez (Ecuador)

Grito por la vida (fragmento)

(óleo y granito sobre lienzo, 2004)

Diseño de portada:

Verónica León

- 1 Mundialización y descomposición interna
Helio Gallardo
- 5 Las luchas populares
Simona Yagenova
- 8 El impacto de la crisis alimentaria
Omar Argueta, Juan Pablo Ozaeta y
Magda Lanuza
- 13 El cambio climático ya está aquí
Andrés Mora Ramírez
- 14 Falacias globales legitiman el despojo
indígena y campesino
Alberto Alonso-Fradejas
- 18 Minería metálica y resistencia
Benjamín Ramos y David Pereira
- 22 Estrategia de seguridad, política fiscal y
endeudamiento
Jorge Coronado Marroquín
- 27 Más intervención militar estadounidense
Laura Carlsen
- 29 Honduras: Colonialismo, militarismo y
presencia extranjera
COPINH

Coedición:



Mundialización y descomposición interna

Helio Gallardo

Las observaciones que siguen procuran entregar un esbozo de la realidad centroamericana tras los “acuerdos de paz” de la década de los noventa, el ingreso acelerado de la mundialización en la región, su concertación de un tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (2003-06) y el auge del crimen organizado y la descomposición social y política en los últimos cinco años del siglo XXI. El texto, por razones de espacio, no se ocupa de la protesta y resistencia populares.

Facundo Cabral y la realidad centroamericana

Un buen referente para introducir la situación centroamericana actual es quizás el asesinato en Guatemala de *Facundo Cabral* a inicios del mes de julio recién pasado. Las autoridades manejan la hipótesis de que el homicidio fue ejecutado por el crimen organizado *regionalmente* y se dirigía contra el empresario que encaminaba al artista argentino al aeropuerto. Los referentes son aquí la violencia, el crimen sistémico (principalmente del narcotráfico), la impropiedad de las instituciones para asegurar la vida y la propiedad de las poblaciones y su correlato, la impunidad de los criminales y, en menor medida, pese a su gravedad, la *debilidad interna de las economías* para sostener una existencia digna para sus gentes, en particular sus poblaciones originarias y sectores rurales. Después de Haití, el PNUD ubica a Guatemala (2), Nicaragua (3), Honduras (4) y El Salvador (9), en ese rango, dentro de los diez países con *peor índice de desarrollo humano* del continente americano. El flujo de remesas familiares, provenientes de emigrantes hacia el área alcanza al 33% del PIB regional (casi los 13 mil millones de dólares). La región sigue importando más que lo que exporta, no realiza reformas tributarias que alivianarían las penurias

fiscales y el carácter de la mundialización en curso *acentúa las diversas y conflictivas brechas internas* y también la *vulnerabilidad* ante las variaciones de la economía global y el endeudamiento externo.

Al país en que se dio el asesinato de Cabral, Guatemala, se le considera un Estado en acelerada descomposición o “*frustrado*”. En el período la moda en el área consiste en atribuir las descomposiciones internas al auge del “crimen organizado”, en particular el narcotráfico y su actividad complementaria, el lavado de dinero. La solución, para los gobiernos centroamericanos, es que Estados Unidos les dé recursos para “ganar la guerra contra el narco”, tal como se supone lo ha hecho con Colombia y México. Se cierra los ojos ante la evidencia de que en esos *países tampoco se ha ganado la guerra* contra el narcotráfico y el lavado de dinero y que la respuesta a este tipo de crimen organizado no parece pasar por su *militarización*.

En todo caso, y para el área, los gobiernos de Estados Unidos no muestran entusiasmo por girar dólares. La tendencia es más bien a imponer acuerdos de patrullajes y acciones “conjuntas”, acompañada de algunas donaciones de implementos policiales y castrenses, que *facilitan geopolíticamente nuevas formas de militarización y control estadounidense* en el área. Nada particularmente novedoso.

El golpe de Estado en Honduras y la ‘normalización’ del régimen democrático

Si el asesinato de Facundo Cabral permite introducir tanto al aumento de la dependencia del área con Estados Unidos, vía la amenaza del crimen organizado, como a la descomposición institucional interna de estos países, cuyo refe-

rente es el *impacto de la mundialización actual* en la región, el golpe de Estado en Honduras (junio 2009), imprevisto pero para nada novedoso, introduce a la comprensión del 'nuevo orden' existente en el área tras los 'acuerdos de paz' de la década de los noventa. Como es sabido, se firmó la paz pero *no se implementaron* al mismo tiempo las *políticas que avanzarían en la resolución de los conflictos* que estuvieron en la base de los conflictos armados.

El golpe de Estado hondureño tuvo como actores a la oligarquía tradicional y a la neo-oligarquía hondureña, a sectores de su poder judicial y a la jerarquía católica. Colaboró la embajada estadounidense sin cuyo asentimiento nadie se arriesgaría a un golpe de Estado en América Central. El instrumento fueron las Fuerzas Armadas. La excusa para la acción se centró en las iniciativas del presidente derrocado (José Manuel Zelaya) para "modernizar" el país y tornarlo más competitivo en relación con la acumulación global en curso. El apoyo estadounidense surgió de sus vínculos con la oligarquía tradicional y de su recelo por la amistad que parecía mostrar el presidente Zelaya con los gobiernos de Venezuela y Cuba. Lo 'sorpresivo' del golpe de Estado fue su proximidad con la *Carta Democrática Interamericana* (2001) que en su momento fue auspiciada principalmente por los nuevos y electos regímenes civiles sudamericanos para evitar ser colapsados por los aparatos armados. Desaparecido el "reto comunista" y destruidos muchos movimientos sociales populares, los políticos civiles y los empresarios consideraron que las dictaduras militares estaban fuera de lugar y tiempo. Debían volver a los cuarteles y esta vez para siempre. Los "buenos negocios compartidos" eran asunto de políticos-empresarios y de empresarios-políticos.

2

Esta visión fue enrarecida por los procesos electorales que dieron el triunfo a candidatos no deseados por el llamado *Consenso de Washington*. Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua, el casi triunfo de Manuel López Obrador en México, por citar cinco referentes, llevaron primero a la administración

Bush a proponer que "las democracias latinoamericanas" fueran monitoreadas por sectores empresariales y tecnocráticos para decretar su legitimidad. Como la propuesta no fue aceptada, Estados Unidos inició una campaña unilateral para *desacreditar* a los regímenes que, aun siendo electos, consideraba *hostiles*. El 'eje del mal' se focalizó en el trío Venezuela/Cuba/Nicaragua al que se agregaría Bolivia. La infección letal provenía ahora del bolivarianismo venezolano y de su insistencia en el carácter participativo del régimen democrático.

El golpe de Estado hondureño vino a zanjar por el momento la cuestión del 'desafío democrático' en América Latina. Los aparatos armados *volvieron a ser protagonistas de la política*. Los cambios deben estar orientados al predominio de la acumulación global y no al empoderamiento social ni ciudadano. Los regímenes democráticos restrictivos de América Central son el modelo a seguir. La Carta Democrática Interamericana (en este momento inútil) debe ser *reformulada* de acuerdo a una nueva realidad que enfrenta a la acumulación global de capital contra los sectores populares de la población y contra los intereses ciudadanos de una "buena vida".

El mensaje, además de su claridad hemisférica, tuvo un destinatario preciso en América Central. En marzo del 2009 fue electo presidente de El Salvador, en una muy estrecha votación, el candidato propuesto por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional: Mauricio Funes. Muchos salvadoreños interpretaron esta victoria como el inicio de una definitiva derrota política de la oligarquía salvadoreña. Era el comienzo de toda una nueva etapa de existencia para los salvadoreños. La administración Funes no les ha dado la razón. En dos años de su mandato la situación de los salvadoreños no ha cambiado significativamente ni en seguridad (el desafío de las maras) ni en creación de empleo y ello le ha valido el alejamiento de muchos sectores sociales populares organizados. Un analista y dirigente del FMNL determina así el perfil del presidente Funes: "... estamos claros que se comprometió con el capital financiero transnacional, el capital de la burguesía

oligárquica del país y con el imperialismo americano y le dio la espalda al pueblo...". Probablemente Funes podría contestarle: "*Es que en guerra avisada no muere presidente*".

Nicaragua: en alianza espuria no pierde candidato

Ya se indicó que, después de Haití y Guatemala, Nicaragua posee la *economía* más *empobrecedora* del área americana. La actual administración de Daniel Ortega, beneficiada por fondos libres de cooperación y reducción de la deuda pública, se ha ocupado de esta realidad de empobrecimiento más en términos de *propaganda* y *clientelismo* que con efectividad, en rubros como la salud, por ejemplo, en el que se da un decrecimiento en la inversión. El desempleo continúa estimulando la emigración de los nicaragüenses. Una encuesta reveló que el 54.6% de la población desea irse del país. El 70% de los nicaragüenses tiene algún familiar en el exterior. Las remesas de los emigrantes subieron de 320 millones de dólares el año 2000 a \$ 823 millones en el 2010.

La administración Ortega-Murillo no parece preocuparse demasiado de estas cifras y de las realidades que enseñan. Su interés más bien se centra en *asegurarse una reelección presidencial*, que sus opositores consideran espuria, reelección que debería asegurar a estos 'sandinistas' un lugar prominente en la conformación de una *nueva oligarquía* post-somocista que se haga cargo privado de los 'buenos negocios' que realiza el país. Así, el sandinismo oficial ha avanzado en el *copamiento de instituciones* como el poder legislativo y los circuitos judiciales al mismo tiempo que se ha acercado al aparato clerical católico y a sectores liberales encabezados por el muy polémico (por corrupto) político y expresidente José Arnoldo Alemán.

Junto a estas iniciativas de concentración de poder la actual administración agita un discurso *jingoísta* cuyos frentes principales son el imperialismo estadounidense (con el cual coincide en la política de militarizar el desafío del narcotráfico) y las disputas con su ve-

cina Costa Rica por territorios limítrofes por los que ninguno de los gobiernos se ha interesado históricamente, pero que *sirven ahora a ambos contendientes para presentarse como enérgicos 'defensores de la patria'*. La situación política e ideológica de Nicaragua quizás sea la más debilitada, y eventualmente conflictiva, en un área que constata día con día que no está preparada para la mundialización que ha entrado en ella ya hace dos décadas.

La centroamericanización de Costa Rica

Uno de los rasgos de la sensibilidad dominante costarricense es la de repudiar cualquier parecido con sus vecinos centroamericanos. Con independencia de lo pintoresco del asunto, la cuestión tiene alcances políticos significativos puesto que Costa Rica boicotea los intentos de articulación política del área y, de cierta manera, *impide que ella se constituya como una región económico-política*. Dado el tamaño y la calidad de la producción de los diversos países de la región la cuestión acentúa la vulnerabilidad de cada país por separado y en su conjunto.

El repudio costarricense por sus vecinos tiene que ver con su distinta historia político-social y también con prejuicios *racistas*. Dejando de lado los segundos, Costa Rica invirtió tempranamente en educación y posteriormente en salud y energía eléctrica y comunicaciones lo que permitió a su población entrar en contacto con su Estado por medio de los beneficios que recibía de él. Estos servicios sociales se vieron acompañados por una sensibilidad democrática que permite a algunos de sus dirigentes jactarse de una "democracia centenaria". Por supuesto, es un mito, pero una parte importante de la población se lo cree. Y, fuera de los mitos, algunos de los servicios sociales han permitido que el país posea *indicadores en salud* que, si no existiese la experiencia cubana, resultarían propios de los países capitalistas líderes en este campo y *sin comparación* en el hemisferio americano.

Peculiarmente con el auge del pensamiento

único, Costa Rica viene enfatizando la demolición de lo que la hizo si no superior, al menos *distinta* a los otros países de América Central. El minoritario estamento político, con cierta voluntad endogámica, ha descuidado, consciente o inconscientemente, desde hace al menos cuarenta años, la educación pública, la seguridad social, la infraestructura vial y otros servicios básicos para la población, la producción y el comercio, de modo que lo que fue un país “adelantado” si se lo comparaba con sus vecinos, *los viene igualando a través de un proceso de “centroamericanización” acelerada*. El proceso incluye la concentración de la propiedad, la polarización social y una irritación que se manifiesta como clara erosión de los sentimientos ciudadanos, es decir de adscripción a un emprendimiento colectivo.

El proceso de centroamericanización se vio acentuado por la irrupción de la mundialización en el área. Entre políticos-empresarios, tecnócratas y burócratas se hizo de la saga del *Consenso de Washington* un pensamiento único que hoy lleva a elogiar el *Tea Party* de Estados Unidos y a hacer suya la imagen pragmática de que “no importa el color del gato sino el que cace ratones”. La mundialización, que genera puntos de inversión privilegiada que descomponen a los antiguos países, abre la posibilidad de *menos buenos negocios pero más cuantiosos*. En la pugna por alcanzar los mejores lugares en esos buenos negocios la minoría dirigente de Costa Rica inició un proceso de desmantelamiento de sus servicios públicos (banca, energía, comunicaciones, educación) para acelerar su privatización. En la actualidad, su Caja de Seguro Social, única en América Latina, parece destinada a naufragar. Si a ello se agrega la desidia e ineptitud de su burocracia pública y la nula o escasa organización ciudadana, huele a desastre inevitable.

Costa Rica parece haber elegido de esta manera *el camino más largo para centroamericanizarse*. Educó a su población, le dio salud, de alguna manera socializó el crédito, bloqueó buenos negocios privados estatizándolos, celebró regularmente elecciones (con alguna excepción) y ahora, entre políticos, tecnócratas

y empresarios locales e internacionales, destruye aceleradamente todo lo conquistado en aras de los “buenos negocios” compartidos o dependientes. Uno de los grandes faltantes políticos de Costa Rica es que en su fase de injerencia estatal sus dirigentes *no se interesaron en promover una cultura ciudadana*. Ahora en su fase de rapiña “a lo centroamericano”, carece prácticamente de protesta y movilización ciudadana. Igualmente carece de partidos que pudieran detener y revertir la destrucción.

Esto, curiosamente, diferencia la centroamericanización reciente de Costa Rica de la historia social de América Central. En América Central las oligarquías locales siempre encontraron *movilizaciones populares* que se resistieron a malmorir bajo su dominación. En Costa Rica el malmorir se gestiona *casi sin protesta ciudadana y social*. Como si no estuviera ocurriendo. Más protestan los empresarios porque a algún funcionario se le ocurre elevarles mínimamente la tasa impositiva, que es baja como en toda América Central.

En síntesis, a la región centroamericana *le ha entrado de lleno una mundialización* ante la que carece de voluntad política y sensibilidad ciudadana que le permitieran sobrevivir superando las descomposiciones y el malmorir. Presionados por la crisis global y el crimen organizado comienzan, en el límite, a transformarse en *Estados frustrados* en los que se acentúan las prácticas de gobierno corruptas y venales que buscan estabilidad mediante *políticas represivas sin contenido ciudadano*. Endeudándose, tienden a tornarse todavía más frágiles y vulnerables ante la prolongación de la crisis global actual o ante el advenimiento de una próxima crisis. De esta manera *convocan a una salida popular* para los desafíos, salida que todavía, aunque se presiente, no logra dibujarse. ◀

Helio Gallardo es filósofo chileno y catedrático de la Universidad de Costa Rica.

En este artículo se utilizó información de Otto Morán, Félix Maradiaga, Enteraterd.com, M&R Consultores y Observatorio de medios de comunicación sobre población migrante y refugiada.

Las luchas populares

Simona Yagenova

Según el último informe del Estado de la Región 2011, "Centroamérica experimentó preocupantes retrocesos económicos, ambientales, sociales y políticos, así como la ampliación de las brechas socioeconómicas y políticas, especialmente entre las naciones del sur (Costa Rica y Panamá) y las del centronorte."¹

Tres rasgos comunes caracterizan a Centroamérica, que es una región en disputa:

- a) por parte del capital transnacional en el marco de una profunda crisis económica de los principales bloques hegemónicos, lo que ha propiciado intensos procesos de lucha contra los megaproyectos, tratados de libre comercio y proyectos basados en la explotación de los recursos naturales.
- b) por parte del capital mafia, especialmente el narcotráfico, convirtiéndose en el territorio más violento de América Latina y el mundo.
- c) por parte del imperio estadounidense en el marco de una renovada estrategia de intervención, para evitar que los procesos emancipatorios del sur tengan posibilidades de expandirse hacia la región.

Centroamérica es muy vulnerable al cambio climático, derivado de procesos históricos que han dejado Estados debilitados y marcos jurídicos-institucionales frágiles; y cuyas secuelas dejan anualmente muertes y destrucción, sin que exista hasta el momento una estrategia regional adecuada para enfrentar el fenómeno.

Con una histórica dependencia económica hacia los Estados Unidos, la región comenzó a modificar su matriz productiva hace como 20 años, dando impulso al sector financiero, comunicaciones, la creación de una nueva matriz energética, la producción cañera y de palma africa-

na, la industria textil y actividades productivas no tradicionales. Los empresarios de la región, aliados con el capital transnacional, cuentan con creciente poder económico, político y una estrategia regional de acumulación. Se han diversificado los destinos de exportación, aunque la región es muy vulnerable a los vaivenes de la economía estadounidense y a la actual crisis económica mundial. Los significativos rezagos sociales, altos índices de desigualdad y pobreza, elevadas tasas de crecimiento poblacional, y un mercado laboral caracterizada por la informalidad, reflejan la realidad de una población históricamente empobrecida, que parece tener pocas posibilidades de cambios significativos en un futuro cercano.

A pesar de estos aspectos comunes, existen diferencias en los contextos políticos nacionales, que son:

- a) En Nicaragua, la principal fuerza política es el FSLN, integrado al bloque ALBA, y con una estrecha relación política y económica con los países del sur;
- b) En El Salvador, el FMLN ganó por primera vez las elecciones generales en el 2009 y se enfrenta a la derecha conservadora aglutinada en el partido ARENA y sus aliados. Recién El Salvador estableció relaciones diplomáticas con Cuba y un acercamiento, todavía incipiente, con los procesos de integración del Sur.
- c) En Panamá, ganó la extrema derecha encabezada por el presidente Ricardo Martinelli, cuyo gobierno es un aliado importante de los Estados Unidos en la región.
- d) En Costa Rica, la victoria electoral de Laura Chinchilla de derecha neoliberal ha significado un nuevo y reforzado vínculo con los intereses de los EEUU en la región.
- e) Honduras, después del golpe de Estado que derrocó al Presidente Manuel Zelaya en 2009, fue expulsado de la OEA y objeto de un bloqueo económico de relevancia

¹ Informe de la Región, 2011, p.361

debido a la presión de los países del ALBA, UNASUR y centroamericanos. El régimen golpista, respaldado por EEUU, lanzó una intensa represión contra las fuerzas opositoras, pero debido a la presión nacional y regional tuvo que dar paso a un cuestionado proceso electoral que instauró al gobierno de Porfirio Lobo. El 28 mayo del 2011,² tras meses de negociación en las cuales se involucraron muchos países, Manuel Zelaya pudo volver a Honduras. No obstante, continuó la persecución política contra sus colaboradores. El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), con su brazo político el Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), creado en una asamblea constituyente el 26 de junio 2011³, se convierte en una fuerza política alternativa y sintetiza la principal oposición al régimen actual.

- f) El Gobierno de Álvaro Colom de Guatemala, autoproclamado social-demócrata, ha mantenido cierta neutralidad en sus relaciones internacionales y en los conflictos regionales. Los tibios esfuerzos por fortalecer la política social se enfrentaron con la sistemática oposición de la derecha, desatando varios conatos de desestabilización política. La izquierda, partidaria y social, por el momento no ofrece un contrapeso significativo para direccionar el país hacia otra dirección.

La constitución de coordinaciones regionales que buscaban afianzar y articular las luchas del movimiento de mujeres, campesinos, trabajadores sindicalizados, y pueblos indígenas de la región, comenzó a erigirse hace más de una década. Durante este periodo, múltiples han sido los esfuerzos, consistentes en la construcción de agendas comunes, intercambios, campañas y movilizaciones conjuntas, que nutrieron la comprensión de la problemática regional,

los desafíos que ésta planteaba, así como dio impulso a acciones de solidaridad, con luchas particulares o nacionales como en el caso de Honduras. No obstante, estos esfuerzos no han trascendido hacia un proceso que integra la diversidad de los movimientos sociales de la región hacia una direccionalidad común.

En el primer semestre del 2011, las fuerzas sociales de la región implementaron múltiples y diversas protestas contra las políticas neoliberales, por el respeto a los derechos de las mujeres y pueblos indígenas, por la defensa de los recursos naturales, en contra de la criminalización de las luchas sociales, así como el rechazo al golpe de Estado en Honduras.

En todos los países, el movimiento sindical libró importantes luchas para que los Estados cumplieran con sus pactos colectivos y otorgaran aumentos salariales, salió en defensa del Sistema de Seguridad Social, denunció violaciones a los derechos laborales y rechazó el incremento a los precios de la canasta básica, del transporte, los despidos injustificados y los intentos de privatización de servicios públicos.⁴

Fueron relevantes las movilizaciones prolongadas de los maestros por el pago -atrasado- de los salarios y para que el legislativo aumente el presupuesto a dicho ministerio (Guatemala), y en rechazo a la intención de derogar el Estatuto Docente y crear la Ley de Fortalecimiento de la Educación (Honduras), que calificaron como una medida privatizante. Mientras en el primero de los casos, los docentes, recibieron el respaldo indirecto del Gobierno, cuya exigencia para que el Congreso aprobara una ampliación presupuestaria,

2 El dos de mayo 2011, con dos votos a favor y uno en contra, la Corte de Apelaciones anuló los juicios contra Manuel Zelaya por supuestos actos de corrupción, que era un requisito previo a que pudiera darse su retorno.

3 N. del E.: En octubre 2011 se dio a conocer que el FARP se inscribirá electoralmente como Partido Libertad y Refundación.

4 En enero, empleados salvadoreños de la salud y los correos demandaron un aumento salarial (enero 2011). En abril, estudiantes de la Universidad de Panamá se enfrentaron con fuerzas de seguridad pública en una protesta por el alza del 21% del pasaje del transporte colectivo. En junio, organizaciones costarricenses manifestaron en defensa de la caja de seguridad social, denunciando que el Estado y las empresas privadas le adeudan 776 millones de colones; además, maestros y trabajadores protestaron contra la política salarial, la reforma fiscal y la privatización de los puertos de Moín y Limón.

fue obstaculizada por la oposición, en el caso de Honduras, los maestros enfrentaron una cruenta represión a lo largo de los meses que duró este conflicto. Como resultado de las protestas, decenas de profesores fueron suspendidos, por lo que iniciaron una prolongada huelga de hambre. Conflictos magisteriales se registraron también en Panamá y Costa Rica.

La lucha de los pueblos indígenas en defensa de su territorio fue importante en tres países. En Guatemala, los pueblos han realizado 58 consultas comunitarias de buena fe en las que rechazan proyectos mineros, petroleros o hidroeléctricos, en que han participado más de un millón de hombres y mujeres. No obstante de ello, se mantuvo vigente el conflicto con la Mina Marlín, propiedad de Goldcorp, ubicado en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. A pesar de que la CIDH decretara en mayo del 2010 medidas cautelares a favor de 18 comunidades afectadas por este proyecto y demandó al gobierno su suspensión, éste no cumplió con dicha resolución. En Costa Rica, el 15 de abril los pueblos de Térrabe, ubicado en el sur del país se opusieron a la construcción del proyecto Hidroeléctrico Diquís, que implicaría la inundación del 10% de sus tierras, e interpusieron denuncias ante los tribunales internacionales. En Panamá, la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé criticó la explotación minera en la Comarca Gnohe y la construcción de la hidroeléctrica de Barro Blanco, en el río Tabasará, implementando diversas protestas como bloqueos de carretera, caminatas y manifestaciones públicas.⁵

Conflictos socioambientales que confrontaron a las comunidades con empresas transnacionales fueron importantes en El Salvador, como los afectados por la construcción de la presa El Chaparral, ubicado en San Miguel (enero 2011); la lucha antiminera contra la empresa Pacific Rims, de capital canadiense, librado por habitantes del departamento de Cabañas,

que ha llevado a una intensificación de violencia, amenazas y asesinatos contra los integrantes de dicho movimiento. En Panamá, el Frente Santeño contra la Minería (FRESACOMI) realizó jornadas de protesta para exigir la clausura del proyecto minero de Cerro Quema, ubicado en el distrito Tonosí (abril); y en Costa Rica (junio), se realizó una caminata desde San José hasta Miramar, en la provincia de Puntarenas, para protestar contra la mina Bellavista; además, se suscitaron diversas protestas para demandar al gobierno que no firme ningún acuerdo con la compañía estadounidense Mallon Oil Company para la explotación petrolera.

Las luchas campesinas, relevantes en todos los países debido a los procesos de reconcentración de la tierra, fueron especialmente difíciles en Guatemala y Honduras⁶, enfrentando la represión de los finqueros o de las fuerzas de seguridad del Estado.

En su conjunto, los movimientos sociales enfrentan enormes retos, producto de una nueva ola de políticas neoliberales, y los desafíos propios que enfrenta la región. El caso de Honduras, los conflictos entre Nicaragua y Costa Rica, el retroceso político en Panamá y Costa Rica y la posibilidad de que un gobierno encabezado por un ex militar gane las elecciones guatemaltecas en noviembre del 2011, dejan entrever un escenario complejo para las luchas sociales del 2012 y requieren nuevas y más profundas procesos de articulación entre las fuerzas sociales y democráticas centroamericanas. <

Simona V. Yagenova es coordinadora del Área Estudios de Movimientos Sociales, FLACSO, Guatemala.

Bibliografía.

CLACSO-OSAL, Red de Monitoreo de la Conflictividad Social de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá

FLACSO Guatemala, Área de Movimientos Sociales, Base de Datos Protesta social.

⁵ El 6 de junio, pueblos indígenas realizaron una caminata de seis días en protesta en contra de proyectos mineros y hidroeléctricos que afectarán su territorio.

⁶ Guatemala: en Chabil Utzaj, Valle del Polochic, Alta Verapaz, marzo-junio; Honduras: Valle del Agúan, mayo-junio.

El impacto de la crisis alimentaria

Omar Argueta
Juan Pablo Ozaeta
y Magda Lanuza

Ante la profundización de la brecha entre pobres y ricos y la agudización de la pobreza, se debe dar lectura al sistema agroalimentario que domina las sociedades actuales. La región de Centroamérica después de haber vivido cruentas guerras civiles en la década de los años 80, pasó a otra década de profundización de políticas neoliberales lideradas por los organismos financieros internacionales. Luego se pasó a la década de libertad comercial, que se concretó en los acuerdos conocidos como Tratados de Libre Comercio. La población ha experimentado tres décadas de profundas crisis sociales, económicas y políticas. En la actualidad, estas crisis pasadas se van juntando a otras nuevas, como la anunciada crisis alimentaria global. Esta última tiene una cadena de ramificaciones porque es una crisis en el sistema de producción, en los precios, en el procesamiento de los alimentos y en el poder de acceder a los alimentos.

A pesar de que en la región, solo Nicaragua tiene consagrado en su Constitución Política, el derecho humano a la alimentación (Arto 46)¹, a todas las demás estructuras de gobierno les ha empezado a preocupar esta crisis. La situación es preocupante ante los datos que entregan organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde todo indica que los

precios de los alimentos seguirán incrementándose en los próximos años. Es por ello que en los últimos tres años se han visto esfuerzos diferentes en cada país para tratar de mejorar la producción local. Algunas de estas medidas, aunque parezcan alentadoras, se podría decir que se han tomado sin advertir las causas que han generado esta crisis. Desde la perspectiva que se vive en el campo, la resistencia campesina por seguir produciendo a pesar de todo, demuestra que esa sería la salvación para millones de centroamericanos/as.

El cambio climático no ayuda

Centroamérica sigue enfrentándose a los vaivenes del cambio climático y al aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial. Por tercer año consecutivo todo el corredor seco de la región ha experimentado sequía, mientras en otras regiones se ha sufrido el exceso de lluvias. Entre los años 2009 y 2011, tres tormentas tropicales causaron fuertes pérdidas en todo el sector agrícola. Según la FAO, esto implicó pérdidas considerables a cerca de 1.9 millones de pequeños productores de granos básicos en la región². Desde luego, los cultivos más afectados fueron la producción de frijol, maíz, hortalizas y verduras.³ Estos son los cultivos de la gran mayoría de los/as agricultores/as que producen los principales alimentos.

Los estudios siguen apareciendo con datos más

1 "En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes".

2 Comunicado de prensa de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (FAO), 16 de agosto de 2011.

3 N. del E.: Este artículo fue redactado antes de conocerse el impacto de la depresión tropical de octubre.

sorprendentes. Según investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el costo por daños y pérdidas como consecuencia del huracán Ida a finales de 2009, superó los 239 millones de dólares sólo en El Salvador. Esta institución recomendaba aumentar los montos de inversión en el agro por un monto de 343 millones de dólares para así poder recuperar la producción perdida a causa de este fenómeno climático.

Con la pérdida de cosechas de finales de año y las pérdidas del siguiente año profundizaron aún más la escasez. El inicio del ciclo agrícola -mayo, 2010- no tuvo las suficientes lluvias para poder iniciar una buena cosecha. Según datos oficiales proporcionados por instituciones gubernamentales de las zonas de mayor producción por país, las pérdidas se calcularon así: 1) Guatemala: en la región del Quiché el 55% del maíz y 100% del frijol; 2) Honduras: en los departamentos de Choluteca, Morazán y Valle, 56% de maíz de primera, 66% de maíz de postrera y 40% de sorgo; 3) Nicaragua: en Nueva Segovia, Madriz y Estelí, 50% de maíz de primera y 100% de frijol⁴. Esta región depende de su propia producción de maíz y frijol por ser los granos principales de su dieta alimenticia.

Según la FAO, Argentina experimentará en 2011 una caída en la producción de maíz en un 8%, todo debido a la falta de lluvia y a las altas temperaturas. En Guatemala -principal productor de maíz en Centroamérica- se espera una reducción en las cosechas de maíz de 3,8%⁵ debido a fenómenos climáticos adversos a inicios de este año. Estos dos países son grandes exportadores de este grano a algunos países de la región pero principalmente a El Salvador.

Al alcance de los precios

De acuerdo con la FAO en El Salvador, la producción de alimentos por habitante se redujo

de 156 kilos en 1970 a 125 en 2007. Según Jaime Tobar, funcionario de la institución, al caer la producción interna no se ha logrado cubrir la creciente demanda y como resultado se han incrementado las importaciones. Tobar, indicó que otro impacto es que al caer la producción nacional, se incrementan los precios de los granos, y por lo tanto las personas tienen que comer menos.

Sin embargo, para las autoridades nacionales existen otros factores que han contribuido a la alza de precios. Después de una larga investigación, encontraron que en los años anteriores ha habido acaparamiento del frijol y especulación de los precios. Esto provocó un alza injustificada en los precios de venta. Se constató que cuatro grandes empresas comerciales, en aras de obtener más del 35% de ganancia, habían incrementado el precio del frijol. El 11 de noviembre de 2010, en un acto ejemplarizante y en defensa del derecho a la alimentación, el gobierno de El Salvador aplicó significativas multas a estos especuladores de granos básicos⁶.

El impacto en el incremento de los precios lo recibe la población. A finales de 2009, en El Salvador, el precio del quintal -100 libras- del frijol era de 100 dólares. Pero a inicios de 2010, el costo era de 128 dólares. Esto provocó que en un solo año el precio de la libra pasara de 0.75 dólares a 1.50 dólares. Esto fue un incremento del ciento por ciento⁷.

Otro grano sensible en la dieta centroamericana es el maíz blanco. Según estadísticas oficiales, entre junio de 2010 y junio de 2011, el precio mayorista del mismo en Guatemala aumentó 56% y en El Salvador subió hasta en un 112%.

En Guatemala y Honduras, la dependencia de la producción familiar de granos básicos para el autoconsumo es bastante alta. Muchos produc-

4 Acción contra el hambre. Situación alimentaria y nutricional en el corredor seco de Centroamérica, diciembre 2010.

5 Comunicado de prensa Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 28 de julio de 2011.

6 Argueta, Omar. *El Salvador ante el precio del frijol, apuestan a producir*. La Jornada del Campo, No. 42, Periódico La Jornada de México, 19 de marzo de 2011.

7 Ibidem.

tores consumen gran parte del maíz producido y venden el frijol. Así también, a lo anterior se suman factores como la fragilidad de los medios de vida en esas zonas de producción de granos básicos de siembra pequeña, escasos insumos, terrenos en pendiente, dependencia del agua de lluvia, sequía recurrente, así como los bajos ingresos que perciben por el trabajo temporal, factores que elevan más la vulnerabilidad alimentaria de carácter estructural.

Un aspecto más a considerar es el factor productivo y de oferta. Según fuentes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), El Salvador produce 10 por ciento de las verduras e importa el 90 faltante, produce el 70 por ciento del maíz e importa el 30 por ciento y produce el 40 por ciento del arroz e importa el 60 por ciento que falta. En el caso del frijol, anualmente el país produce cerca de 1.8 millones quintales, pero se consumen casi 2.5 millones.

En Guatemala la situación es más compleja sobre todo porque sigue siendo aún uno de los países con mayor desnutrición en América Latina. Según entrevistas realizadas a muchas familias rurales, los campesinos afirman que su producción de alimentos les dura tres o cuatro meses del año. El resto de los meses del año tienen que comprar su comida. Esto hace que familias productoras se conviertan en consumidoras 8 meses al año. En el peor de los casos, son estas familias quienes experimentan hambrunas.

Señales de los gobiernos: importaciones gobierno a gobierno y reactivación de agricultura familiar

Después de décadas de dismantelamiento y abandono de las capacidades de las instituciones gubernamentales, la crisis trae algunos efectos positivos. Por otro lado, ahora aparecen grandes organismos regionales como la FAO, CEPAL y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) debatiendo estrategias comunes. En junio de 2011 se reunieron para acordar la creación de sistemas de información de precios y producción

regional, la ampliación y fortalecimiento de las redes de protección social y el apoyo de la agricultura familiar.⁸

En El Salvador las ruinas de los antiguos graneros del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) yacen como testigos de lo que una vez hizo el gobierno. En octubre de 2010, en negociaciones bilaterales con el Gobierno de Nicaragua, el MAG de El Salvador decidió importar y vender directamente al público 50 mil quintales de frijoles. Para ello, estableció plazas de venta y definió los precios a 0.75 dólares la libra. De igual forma, en el 2011 el Gobierno Salvadoreño ha importado y vendido 464 mil quintales frijol de Nicaragua. Otra gran importación gubernamental se hizo con frijol de China por una cantidad de 90 mil quintales. Esta medida contribuyó a que el pueblo tuviera acceso al grano rojo a precios estables a pesar de la presión de la gran empresa privada que acusó a las entidades gubernamentales de distorsionar las leyes de libre mercado.

El 2 de febrero de 2011, el Gobierno de El Salvador presentó su programa: Plan de Agricultura Familiar. Los tres pilares de este proyecto de gobierno son: seguridad alimentaria, encadenamientos productivos e innovación agropecuaria. Con ello, se busca impulsar la agricultura de subsistencia que identifica a la mayoría de salvadoreños que producen en el campo. Con este plan, el gobierno de Funes pronostica una cosecha de 19.6 millones de quintales de maíz -esto es 3 millones más que en el 2010-; una producción de 2.7 millones de quintales de frijol -más del doble producido el mismo año respecto al 2011-. Según el Ministro López Suárez, con esta cantidad producida, por primera vez se podría superar la demanda nacional.⁹

En el caso de Nicaragua, el gobierno ha apostado por cuatro años consecutivos al Programa Productivo Alimentario Hambre Cero, conocido como "bono productivo". Este es un programa que entrega semillas y fertilizantes, además

8 Comunicado de prensa Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 28 de julio de 2011.

9 El Diario de Hoy, 25 de agosto de 2011

de animales de patio y vacas, a familias empobrecidas. El impacto ha sido que hoy Nicaragua ha logrado estabilizar su producción de granos para el consumo nacional y para la exportación. Sin embargo, ante los impactos del cambio climático a finales del año 2010 y en el 2011, Nicaragua tomó medidas para restringir y planificar las exportaciones. Estas han sido medidas que garantizan a la población nacional los precios y su propio consumo.¹⁰

La situación de Nicaragua es alentadora, tal como lo demuestran algunos informes independientes. Según una evaluación del primer trimestre de 2010 a familias rurales, de la organización Acción contra el Hambre, muy pocas familias reportaron una disminución de la cantidad de comida disponible en sus hogares. Muchas de estas familias entrevistadas habían recibido el “bono productivo”. Ellas comentaban cómo habían vendido parte de sus excedentes en el mercado para conseguir dinero efectivo. La producción de cerdos y gallinas a escala menor ha traído más disponibilidad de los productos y una reducción en los precios.

En Honduras, existen evidencias de programas que se implementaron en la zona Sur antes del golpe. Estos funcionaron por aproximadamente 5 años. El gobierno ofrecía semillas, fertilizantes y asistencia técnica a pequeñas familias agrícolas. Este programa de seguridad alimentaria aún hoy ha contribuido a paliar el impacto en la pérdida de cosechas¹¹. A pesar del retroceso que significó el golpe de junio de 2009, se demostró que iniciativas como éstas podrían ayudar a reducir la vulnerabilidad de las familias campesinas.

El caso de Guatemala resulta paradójico. El Gobierno decidió abrir más contingentes a la importación para paliar la crisis de los precios de los granos básicos. En el 2010 el maíz amarillo tuvo apertura de más de 800,000 TM. Esto sobrepasa las importaciones totales que Guatemala tiene de ese grano. Por otro lado, el oligopolio que manejan estas importaciones hace

que esos supuestos beneficios difícilmente se trasladen al consumidor. Mientras los agroexportadores estadounidenses siguen disfrutando de los subsidios (solo en estos últimos cinco años los productores de maíz han cobrado un monto de 21.6 mil millones de dólares), Guatemala, en el mismo período, ha tenido pérdidas fiscales que suman 137 millones de dólares.

La apertura comercial, parte de las causas

En julio pasado se cumplieron cinco años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América, el TLCRU-CA. Las exportaciones agrícolas de Centroamérica hacia Estados Unidos ocupan el tercer lugar después de la manufactura y la industria extractiva. Ante el declive del primer rubro, la agroindustria ya empieza a ocupar un lugar privilegiado. Sólo en Guatemala, las exportaciones de azúcar han significado US\$ 118 millones. Junto al azúcar, el banano, el café y el melón, constituyen los principales productos agrícolas para el mercado estadounidense. Esto ha implicado que haya una ampliación de la frontera agrícola y una disminución de la tierra fértil para el cultivo de los granos básicos. A esto hay que agregarle la extensión de los cultivos de palma africana. Según el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, el 29% de la superficie sembrada con palma en 2010, era ocupada diez años atrás por los cultivos de granos básicos.

En búsqueda de nuevos mercados algunos programas han venido orientando la producción de los productos no tradicionales. Sin embargo, con los resultados obtenidos hasta hoy, está lejos de demostrar que es la mejor vía para superar los niveles de vida del campesinado empobrecido. Patzun en Chimaltenango, Guatemala, posee las mejores tierras fértiles y ha sido un experimento después del Tratado de Libre Comercio. A miles de pequeños productores -la mayoría con préstamos bancarios- se les empujó a expandir sus áreas de cultivo de arvejas chinas, arvejas dulces y

¹⁰ El Diario de Hoy, 2 de mayo de 2011

¹¹ Op cit, pag. 9

brócoli. Algunos de éstos hasta perdieron sus tierras y pasaron a trabajar como jornaleros de las empresas que fueron capaces de hacer las inversiones. Otros no pudieron colocar en el mercado internacional sus productos, y la mayoría con el ingreso generado por la venta de estos productos no logran comprar los granos básicos que son la base de su alimentación.

La crisis y los discursos

Mientras el cambio climático no ayuda a los pequeños y medianos productores, tampoco ayuda el pensamiento de quienes ven a la agricultura como retroceso. El ex ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, Mario Salaverría, expresó que El Salvador no debe centrar sus esfuerzos en que las familias de la zona rural produzcan los alimentos, sino que deben educarse para convertirse en empleados o profesionales. De esta forma tendrán ingresos que les aseguren tener capacidad adquisitiva para comprar los alimentos que necesiten. La apuesta del Sr. Salaverría es impulsar los sectores industriales y de servicios para que los salvadoreños tengan más y mejores empleos¹².

Aun desde la perspectiva de la derecha más retardataria ypreciándose de ser ilustrada, los señores no se ponen de acuerdo. El banquero chileno Claudio de Rosa, radicado en El Salvador desde hace algún tiempo, a diferencia de Mario Salaverría, expresó que lo que provocaba la crisis en los precios era el total abandono del sector agropecuario, la falta de tecnificación, la “desmantelación” y “disminución” del programa de semilla mejorada por parte del gobierno actual. También se queja de los “excesivos” impuestos para el sector agropecuario¹³. Según este señor, por todo esto ahora El Salvador tiene que importar alimentos caros. Lo raro es que estos comentarios no fueron realizados durante los veinte años de administración del gobierno de ARENA, sino ahora cuando la acción gubernamental ha dado iniciativas claras. Este año en El Salvador se han atendido

17,084 créditos por un valor de más de \$22 millones, a diferencia del 2009, en el que apenas se atendieron 9 mil créditos por un monto de \$13 millones. Los créditos se han incrementado luego de que el Gobierno anunciara una tasa de interés preferencial de 4% para los agricultores¹⁴.

A manera de conclusión podemos señalar que la situación es incierta. Por una parte existen señales de mejora y esperanza en algunos países, por otro lado, nunca se sabe cuándo será la próxima sequía, deslave, inundación o eje de vaguada que acabara con los cultivos en aquellas tierras marginales que es donde cultivan los pequeños/as productores/as. Además, están las desatinadas medidas que a veces implementan los gobiernos en detrimento del campesinado y los/as consumidores y en beneficio de los grandes monopolios.

Es importante no olvidar que la crisis alimentaria que viven los países empobrecidos también obedece al papel oligopólico de las grandes empresas transnacionales de la industria agroalimentaria. Muchos de estos emporios controlan los precios, la tecnología, la certificación, los canales de comercialización y distribución, la fuente de financiamiento de la producción alimentaria, el transporte, la investigación científica y los fondos genéticos de la industria y paquetes tecnológicos incluyendo las semillas y los fertilizantes. Además, estos mismos imponen las reglas internacionales con que se comercian los alimentos. A pesar de ello, los pueblos están en el derecho de exigir a los Estados nacionales medidas urgentes para rescatar el derecho a la alimentación y salvar de la desnutrición y la hambruna a poblaciones enteras. Estas son tragedias humanas que provocan los especuladores de los alimentos y los conglomerados agroindustriales, por lo tanto, el precio no lo pueden seguir pagando los sectores más indefensos que luchan por sobrevivir cada día. <

Omar Argueta, Juan Pablo Ozaeta y Magda Lanuza integran la Iniciativa contra los Agronegocios en América Latina.

12 ibidem

13 El Diario de Hoy, 13 de mayo de 2011

14 El Diario de Hoy, 18 de julio de 2011.

El cambio climático ya está aquí

Andrés Mora Ramírez

Una peligrosa conjunción de factores y problemas estructurales, junto con el impacto del maldesarrollo global (que sigue la lógica de la economía de rapiña), convierten a Centroamérica en el “punto caliente” más vulnerable al cambio climático entre las regiones tropicales del mundo.

El impacto de las lluvias que azotaron sin clemencia a Centroamérica durante dos semanas fue devastador: más de un centenar de muertos, cientos de miles de damnificados y desplazados -la mayoría de ellos, personas que viven en condición de pobreza- por las inundaciones y derrumbes, cuantiosos daños en carreteras y puentes, pérdida de cosechas agrícolas y, en general, un caótico panorama de afectación social y económica.

Desgraciadamente, son escenarios de tragedia a los cuales nos enfrentamos los centroamericanos año tras año, y que van en paralelo con las manifestaciones del fenómeno del cambio climático a escala planetaria. Como explica Raúl Artiga, especialista de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, “el cambio climático no es algo que va a venir, lo estamos sufriendo, esto (el temporal) es una evidencia más de la vulnerabilidad que nos está llevando a niveles inciertos de afectación, con la cual nuestras sociedades van a tener que convivir” (La Prensa Gráfica, 17-10-2011). No en vano CEPAL estima que en los próximos años la región deberá destinar al menos el 10% de su producto interno bruto para atender la recuperación de los daños provocados por el cambio climático (AVN, 19-10-2011).

Una peligrosa conjunción de factores y problemas estructurales, como por ejemplo la

vulnerabilidad social (producto de la ecuación de pobreza más desigualdad), los rezagos y deficiencias en infraestructura y planificación urbana, la concentración de poblaciones en áreas de riesgo, el cambio en el uso de suelos y la sobreexplotación de recursos, junto con el impacto del maldesarrollo global (que sigue la lógica de la economía de rapiña), convierten a Centroamérica en “el *punto caliente* más vulnerable al cambio climático entre las regiones tropicales del mundo”, según el Informe Estado de la Región 2011.

En efecto, el capítulo Panorama Ambiental del Informe identifica al cambio climático como uno de los tres principales riesgos estratégicos que penden sobre el futuro de los países centroamericanos. Prueba de ello es que en los últimos 20 años, el número e impacto de los desastres hidrometeorológicos (tormentas, huracanes, inundaciones) creció a un ritmo acelerado, que pasó de los 60 eventos para el período 1990-1999, a los 121 para el período 2000-2009.

Es decir, se duplicó la cantidad de este tipo de desastres, sin que se registren cambios en los patrones sociales, económicos y culturales de crecimiento demográfico, distribución de la riqueza y explotación y uso de los recursos naturales que caracterizan la rica biodiversidad istmica; y por supuesto, sin que la capacidad de respuesta, disposición de recursos financieros y acción conjunta de los Estados mejorara sustancialmente.

Como lo establece el Informe, “la acción regional en estos ámbitos se muestra similar a otros esfuerzos por el desarrollo: se da con retraso, sin claridad ni información suficiente, dependiendo de recursos externos y con medidas aisladas, fragmentadas y no siempre sostenibles”. Un dato ilustra estas deficiencias: de los 65 documentos de políticas públicas relacionadas

pasa a la página 33

Andrés Mora Ramírez es Profesor e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos en Universidad Nacional de Costa Rica.

Falacias globales legitiman el despojo indígena y campesino

Alberto Alonso-Fradejas

La crisis de (sobre)acumulación con la que el siglo XXI recibe al Norte económico en los ámbitos económico-financiero, alimentario y ambiental, marca un parte aguas con la ortodoxia neoliberal de fines del siglo pasado. Araghi y McMichael (2006) señalan cómo ante la temida “estanflación” (congelamiento del crecimiento económico ligado a un repunte inflacionario) el capital ha venido adoptando una doble estrategia: Por un lado, la de *concentrarse y apretar* (a las economías más débiles, a las clases trabajadoras). Por otro lado, la de trasladarse de las actividades productivas que lo inmovilizan, llevando a cabo reformas para incrementar su flexibilidad.

Siguiendo estas prescripciones, la crisis se relativiza para el capital financiero internacional que no sólo encuentra refugio rentable, sino también incentivos públicos y renovada legitimidad en los mercados de futuros y derivados de materias primas como el petróleo, los minerales, los alimentos y otras materias primas agrícolas.

Las virtudes de esta reubicación del capital financiero han sido destacadas en las Cumbres del G-20 (2009 y 2011) y por el Secretario General de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, quien instó a los gobiernos latinoamericanos a “aprovechar” este viraje del capital financiero hacia las materias primas señalando que “uno de los aspectos positivos de la crisis serán las nuevas inversiones destinadas a cubrir la *demandas global* [...] Tenemos que desarrollar la agricultura, tenemos que hacer de este sector un *objeto* más de flujos de inversión y de crecimiento” (América Economía 17/06/2011, énfasis propio).

Pero una vez más, el gran promotor global de un modelo de crecimiento económico excluyente, es el Banco Mundial; desde el Informe del Desarrollo Mundial de 2008 sobre “Agricultura para el desarrollo” (2007), el reporte “Los recursos naturales en América Latina y el Caribe ¿Más allá de bonanzas y crisis?” (2010) y especialmente, a partir de su informe sobre acaparamiento de tierras de 2011 (*Rising Global Interest in Farmland*).

Ahora, el objetivo es la tierra

En este último informe, el Banco Mundial sostiene básicamente que “las adquisiciones de tierra a gran escala pueden ser un vehículo para la *reducción de la pobreza* a través de tres mecanismos fundamentales: 1) la generación de nuevas oportunidades para la agricultura por contrato con campesinos; 2) los pagos por la cesión o la venta de la tierra; y 3) la generación de empleo asalariado” (Deininger 2011, 38-39-64). Tres virtudes globales sobre las que trataremos recurrentemente en estas líneas, pues a nuestro entender representan tres falsos metarelatos que industria y gobiernos abrazan a discreción para legitimar su *piñata* sobre los remanentes de tierra y bienes naturales aún en manos indígenas y campesinas, en esta primera década del siglo XXI.

La válvula de escape de la crisis de (sobre)acumulación por la que ha optado el capital financiero internacional, redirigiendo su interés hacia las materias primas, confiere a las elites de muchos países (aún) ricos en recursos naturales del Sur global -como los centroamericanos- un renovado incentivo para la inserción económica mundial a través de un modelo de corte primario-exportador. Un vie-

jo conocido latinoamericano, que en esta primera década del siglo XXI ya no sólo considera como mercancías o *commodities* globales a los minerales, los hidrocarburos o la producción agropecuaria, sino que se repiensa para incluir también la tierra y en general la base natural de recursos y bienes naturales, para atender el creciente mercado global de derechos sobre la tierra y el agua, e incluso sobre el oxígeno y el carbono.

En este contexto, si bien Centroamérica ha experimentado un crecimiento inédito en las licencias de exploración y explotación de minerales y petróleo en la última década, la reorientación primario-exportadora del istmo se asienta fundamentalmente sobre el nuevo acaparamiento de tierras para la producción de monocultivos de exportación, pero ahora bajo un régimen *flexible* de capitalismo agrario.

Se han incrementado las superficies con banano y otras frutas de exportación, los monocultivos forestales (hule, pino, teca, etc.) y especialmente las plantaciones de caña de azúcar y las de palma aceitera, pues éstas se vinculan además con la creciente demanda mundial de agrocombustibles. Una vez más, estas plantaciones se despliegan en territorios indígenas con las principales reservas de bosque tropical y humedal, como la Mosquitia y el conexo Bajo Aguán en Honduras, la Región Autónoma del Atlántico Norte en Nicaragua, o las Tierras Bajas del Norte de Guatemala.

Como veremos a grandes rasgos para el caso guatemalteco, en todos estos casos el capital primario-exportador (o *extractivista*) precisa reestructurar tanto las relaciones sociales como los ecosistemas y paisajes de los territorios rurales del istmo, para adecuarlos a su nuevo ciclo de acumulación por desposesión.

Según nuestros cálculos, la *superficie establecida* total con palma aceitera en Guatemala en el año 2010 fue de 101,784 Ha¹. Un área

que si bien alcanza ya las cifras cultivadas con café en la cúspide del segundo hito histórico del despojo indígena-campesino (a raíz de la génesis liberal de la República de Guatemala), apenas representa aún el 11% de las 927,151 Ha aptas para su cultivo (o el 46% de la superficie agrícola total del país).

Ahora bien, el ritmo de crecimiento es elevado (8,703 Ha/año) lo que ha llevado a que la superficie establecida con palma aceitera se haya incrementado en un 590% entre el año 2000 y el 2010. Además, al contrario de lo que los grupos de presión política y de Responsabilidad Social y Ambiental Corporativa de la industria plantean, estas nuevas plantaciones han incentivado (directa e indirectamente) cambios radicales en los usos del suelo en los territorios de expansión: el 48% las nuevas superficies establecidas con palma aceitera en Guatemala en 2010 eran bosques tropicales y humedales en el año 2000; el 29% eran cultivos alimentarios; el 9% pastizales; el 5% sabana/yerbazar; y sólo el 9% caña de azúcar y otros cultivos de exportación tradicional.

En este contexto, la pendiente y conflictiva “cuestión agraria” recobra importancia medular en la disputa política alrededor del “modelo de desarrollo”. Hasta la fecha, y salvo limitadas excepciones, las burocracias patrimoniales centroamericanas se han centrado en asegurar privilegios post-coloniales para la elite criolla que, de manera directa y/o asociada con capitales internacionales, está detrás de las iniciativas (neo)extractivas.

Mientras tanto, para la población rural, en insostenibles condiciones de hambre y desigualdad social, se reserva la coerción, la criminalización y la violencia del Estado y de los grupos armados paramilitares, como en los recientes -y crueles- casos de asesinatos selectivos de líderes y desalojos masivos de cientos de fa-

años sembrada (periodo mínimo a partir del cual logramos identificarla a través de fotografía aérea y teledetección (*remote sensing*). Por este motivo, y con base en observaciones directas en el campo, la superficie “sembrada” con palma aceitera es sensiblemente superior a la “establecida”.

1 Bajo el término de “superficie establecida” nos referimos a palma aceitera que al menos lleva dos

milias sin tierra en el Bajo Aguán hondureño y en el Valle del Polochic en Guatemala, ambos paraísos edafo-climáticos para la palma aceitera y la caña de azúcar.

Y es que las plantaciones necesitan de la tierra campesina, pero no de su trabajo. Requieren los servicios y bienes que brindan los ecosistemas, pero sólo por unos años.

La historia nos vuelve a mostrar cómo hoy en día la ruta para la soberanía alimentaria, desde la familia hasta el istmo centroamericano, y en definitiva para contribuir a sistemas de sustento más resilientes y sostenibles en las familias rurales, pasa en materia productiva/reproductiva por el fortalecimiento de la agricultura (y pecuaria) familiar. Una actividad que aún casi sin tierra, y con graves carencias productivas arrastradas desde el desmantelamiento de los sectores públicos centroamericanos, no sólo genera más ingresos y alimentos que las plantaciones agroindustriales, sino que también ha demostrado cómo puede combinarse con otras actividades agropecuarias y no agropecuarias.

Dürr (2011) señala cómo en territorios de expansión de la agricultura industrial en Guatemala (aptos incluso para dos cosechas anuales de granos) mientras la producción campesina de maíz genera un Valor Agregado Bruto agrícola promedio de US\$ 636 por Ha/año, la de frijol US\$ 779 por Ha/año y la de chile hasta US\$ 2,836 por Ha/año, la de caña de azúcar genera sólo US\$ 788 por Ha/año, y la de palma aceitera apenas alcanza los US\$ 379 por Ha/año.

De este modo, y sin dejar de señalar la necesidad de reforzar las capacidades de la producción familiar, para Guatemala pierde sentido el ya famoso argumento pro-agricultura industrial del Banco Mundial relativo a la mayor “generación de valor” (Deininger 2011) de las plantaciones, con respecto de la agricultura familiar.

Monocultivos

Por si esto fuera poco, hay que recordar que la riqueza generada por los monocultivos de exportación, como la caña y la palma, no se disfruta donde se produce, sino que se extrae del territorio para retribuir a esa oligarquía post-colonial terrateniente y al capital financiero internacional que controlan las plantaciones a cientos (sino miles) de kilómetros de distancia.

Paralelamente, la palma aceitera no es una estrategia deseable desde la perspectiva productiva y reproductiva para las economías familiares rurales, por tres razones adicionales:

Primera, el crecimiento de la superficie establecida con palma aceitera compite por tierra, recursos financieros públicos, y bienes y servicios naturales con la agropecuaria familiar.

Una de cada diez familias campesinas de las Tierras Bajas del Norte de Guatemala vendió y/o perdió su parcela en la última década. A pesar de las virtudes que el Banco Mundial atribuye a esta “reubicación de tierras” sobre la reducción de la pobreza (Deininger 2011) la mayoría de quienes vendieron recibió nimias cantidades de dinero que ni les permitió abandonar la agricultura, ni volver a comprar tierra.

Además, aunque de momento los productores campesinos de palma por contrato apenas representan al 1.03 % de hogares rurales de las Tierras Bajas del Norte de Guatemala, es importante dejar claro que las oportunidades señaladas por el Banco Mundial para la reducción de la pobreza a través de la agricultura por contrato -y financiadas con US\$ 1.5 millones por el dizque paupérrimo presupuesto agropecuario guatemalteco- no trascienden más allá del plano teórico.

Segunda, la agricultura industrial destruye empleo rural. La agricultura familiar no sólo es mucho más intensiva en fuerza de trabajo por hectárea cultivada, sino que además ocupa a un número relativamente mayor de la población económicamente activa en los territorios de expansión de la agroindustria en Guatemala

(40% vs. 35% de la PEA empleada en la palma). De hecho, la PEA rural sin tierra se emplea principalmente en la agricultura familiar (53% vs. 40% en agroindustria y fincas). Así, la principal “bondad” señalada por Banco Mundial (2011) de la re-ubicación como trabajadores de las plantaciones industriales tanto de aquellos “productores menos eficientes” despojados de sus tierras, como de la población rural sin tierra ni oportunidades de empleo no agropecuario, no encuentra eco en el caso de Guatemala.

Y en tercer lugar, y siempre según nuestros resultados, la gran mayoría de la PEA rural empleada fuera del hogar en las Tierras Bajas del Norte de Guatemala en otras actividades diferentes de la agricultura familiar, combina su empleo con la propia producción agrícola (cultivando hasta 3 Ha de tierra en el 69.5% de los casos, y entre 3 y 10 Ha en el 26.8%).

El trabajo en una plantación agro-industrial monopoliza el tiempo diario de las y los trabajadores en las plantaciones (con jornadas mayores de 8 horas, incluyendo el desplazamiento) quienes ya no pueden dedicarse a otra actividad. De este modo está siendo aniquilada la multifuncionalidad de las economías familiares rurales ¡que tanto predicaban hace diez años quienes ahora promueven las plantaciones de palma!

Por estas diferencias tan radicalmente profundas entre las lógicas económicas sobre las que se asientan las plantaciones de caña y palma (extractiva-acumulativa) y las economías campesinas e indígenas (reproductiva, más no por ello aislada de los mercados) vemos complicado que la actual *coexistencia* funcional pueda transformarse en una *convivencia* en la que “todos ganan”, o el famoso modelo “win-win-win” para Estado, trabajo y capital, que predica el Banco Mundial.

Y es que el capitalismo agrario flexible de los agronegocios de la caña y de la palma también impacta en el carácter de las relaciones sociales intra-comunitarias: *descomunalizando* y *reificando* las tradicionales relaciones de economía moral; recargando a las mujeres rurales

con crecientes responsabilidades productivas y representativas, sin alivianarlas siquiera de una sola de las reproductivas.

Variopintas personas (físicas y jurídicas) ó “coyotes agrarios” de importancia política, religiosa y simbólica, siembran la discordia en muchas comunidades buscando generar un nuevo *consenso ideológico* que controle y debilite la organización comunal, reasignando representaciones, identificaciones y valores en torno a la propiedad, la tierra, el trabajo, el ocio, el consumo, la familia y, en definitiva, sobre la cosmovisión y la propia interpretación del desarrollo.

A estos esfuerzos de dominación en el plano simbólico-cultural se suma la recurrencia de viejos mecanismos de control social característicos del moderno sistema-finca del siglo XIX, y la señalada paramilitarización territorial por parte de elementos al servicio de intereses privados (seguridad de los agronegocios y de otras empresas extractivas, y crimen organizado), para conformar una poderosa estrategia orientada a debilitar la lucha comunitaria, campesina e indígena, en los territorios en disputa.

Sin embargo, la historia demuestra cómo las capacidades para ganar, mantener y controlar el acceso a la tierra cultivable y a los bienes naturales no son “dadas”. Se determinan históricamente en el curso de las cambiantes relaciones sociales y marcos normativo-institucionales, en cuyo contexto emergen tanto nuevos conflictos, como acuerdos cooperativos y alianzas. ◀

Alberto Alonso Fradejas es investigador del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) de Guatemala.

La idea del presente artículo y las informaciones no citadas fueron extraídas de “Alonso-Fradejas, A., Caal, J.L., y Chinchilla, T. (2011). *Plantaciones agro-industriales, acaparamiento de tierras y dominación territorial: una interpretación situada del primario-exportador en la Centroamérica del s. XXI*. Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de CONGCOOP. MagnaTerra Editores, Guatemala”. Disponible en www.congcoop.org.gt

Minería metálica y resistencia

Benjamín Ramos
David Pereira

La actual crisis mundial ha puesto a prueba todos los parámetros, preceptos y políticas del modelo y sistema económico mundial imperante, ha provocado un escenario de incertidumbre, dando origen a propuestas que pretenden encontrar soluciones rápidas para salir del estancamiento económico en el que se encuentra la economía mundial.

En este contexto de crisis, el oro aparece como el activo ideal para el refugio de los inversionistas y como un instrumento de especulación significativo, provocando que en los últimos meses la onza troy llegue a cotizarse por encima de los US\$1,900.00 convirtiendo así a cualquier inversión que implique la extracción o manipulación del oro en una inversión extremadamente rentable y segura para la acumulación del capital.

Por tanto, la industria minera tiene en la actualidad una verdadera fortuna en sus manos, sobre todo si puede realizar sus operaciones a bajos costos y con muy pocas o nulas regulaciones sobre su actividad. Estas condiciones se cumplen a la perfección en los países tercerizados o periféricos, como los de la región centroamericana, países que poseen importantes reservas naturales, incluyendo en ellas un porcentaje considerablemente atractivo de metales preciados, como el oro, plata, cobre, uranio, etc. presentando así un escenario de interés para la industria minera.

18

La minería se ha presentado como una actividad que permite abrir el camino hacia el “desarrollo” de países que, como los centroamericanos, tradicionalmente se han encontrado

subdesarrollados. La paradoja surge cuando en vez de permitir o abrir caminos que conlleven al “desarrollo”, la minería se convierte en un instrumento más para perpetuar la miseria, enfermedades, pobreza y deterioro ambiental en los países centroamericanos, los cuales son obstáculos para alcanzar un mejor futuro de país y en consecuencia el subdesarrollo se convierte en un círculo vicioso.

Según estudios realizados por diversas instituciones estatales centroamericanas las empresas mineras en promedio no pagan más del 1.5% de los ingresos generados al Estado, sean éstos en materia de regalías o tasas municipales, entre otros. Este dato contradice el discurso de las empresas mineras que sostienen que a través de sus inversiones y aportes monetarios generan desarrollo en los países.

Las empresas mineras han demostrado que pueden pasar fácilmente por encima de las restricciones y obligaciones de las legislaciones nacionales (que de por sí son muy laxas) e incluso pueden utilizar acuerdos como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) para quitar del camino todos los obstáculos para su inversión.

Reparto del territorio

En cuanto a la ocupación de los territorios, se tiene información que Honduras cuenta con el 36.9% del total de concesiones en Centroamérica, teniendo un 31% de su territorio concesionado a empresas mineras para la explotación minera metálica; por su parte Guatemala, según fuentes del movimiento en resistencia anti minero, tiene un área concesionada a las empresas mineras de 32,667 km², lo que implicaría que el área concesionada es cuatro veces mayor que la plasmada en

Benjamín Ramos y David Pereira son miembros del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, de El Salvador, www.ceicom.org.sv

los datos oficiales por parte del Gobierno de Guatemala, lo cual denota la complicidad de éste con las empresas al no publicar las cifras reales.

El país con menor número de concesiones y proporción de área concesionada es El Salvador, con 29 concesiones otorgadas y solamente el 2.35% del territorio concesionado en el área centroamericana, lo que concuerda con el hecho de que en El Salvador no existen proyectos mineros que en la actualidad se encuentren en fase de explotación. Sin embargo, según declaraciones realizadas por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, a diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, existe un listado de 73 proyectos mineros pendientes de autorización para el otorgamiento de licencias de exploración y explotación.

La negativa del gobierno salvadoreño a conceder los permisos de explotación minera ha llevado a que dos empresas, una de origen canadiense y otra de origen estadounidense, interpongan demandas millonarias contra el Estado salvadoreño en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), ente que forma parte de la estructura del Banco Mundial.

A partir de la información anterior se concluye que de todo el territorio centroamericano, el 14% se encuentra concesionado a las empresas mineras para que éstas realicen sus operaciones, lo que quiere decir que de cada 10 km² de la región centroamericana, 1.4 km² están en poder de la industria minera.

Lo anterior tiene una serie de implicaciones globales en la región: una de ellas es que al espacio geográfico con el que cuenta la minería es el doble que el espacio dedicado a la producción de granos básicos; es decir, por cada km² que se encuentra cultivado con granos básicos en Centroamérica existen 2 km² sobre los cuales la industria minera ejerce control.

Impactos

Según el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Pacific Rim al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, sólo en el proyecto minero El Dorado, durante el proceso de lixiviación se utilizarían 10.4 litros de agua por segundo, lo que equivale a un aproximado de 900 mil litros diarios, la misma cantidad que abastece a una familia promedio durante 20 años.

A partir de lo anterior se dibuja un escenario oscuro para el recurso hídrico de la región centroamericana, que se deberá afrontar de cara a los proyectos de explotación de minería metálica. Dicho escenario traerá tres impactos: en primer lugar, habrá escasez del recurso hídrico apto para el consumo humano mientras se lo destina para la explotación minera, lo cual genera conflictos comunitarios.

Dichos conflictos alcanzan incluso altos niveles de violencia y de inseguridad, tanto en el plano jurídico como en el personal, afectando a los defensores de los recursos naturales que aún conservan las comunidades. Todo esto trae episodios de desalojos comunitarios, represión estatal y de las empresas mineras, llegando a casos de asesinatos de líderes y lideresas que integran la resistencia anti minera en estos países.

En segundo lugar, se afectan los mantos acuíferos a partir de las profundas excavaciones de los proyectos mineros, que las empresas realizan mediante la utilización de toneladas de explosivos, con lo que, además del desaparecimiento de las fuentes de agua superficial, provocan destrucción en las viviendas por las ondas expansivas.

Y finalmente, el tercer impacto se da a partir del envenenamiento de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, por la contaminación producida en el proceso de explotación minera a través de los residuos tóxicos.

La misma empresa transnacional de capital canadiense Pacific Rim estima que se usará

dos toneladas diarias de cianuro en algunos de sus proyectos en El Salvador, químico que incluso está vedado en algunos estados de Canadá, Estados Unidos y Europa. Para el caso del proyecto minero Cerro Blanco, localizado en el municipio de Asunción Mita, República de Guatemala, se estima que se utilizarán 6 toneladas diarias de cianuro, totalizando 2160 toneladas de cianuro anuales, cuyos desechos serán vertidos a la cuenca alta del río Lempa, la cual es compartida por Guatemala, Honduras y El Salvador, afectando aproximadamente a cerca de 4 millones de personas salvadoreñas que tienen relación directa con estas aguas transfronterizas.

Junto a la contaminación del agua, la explotación minera metálica también afecta a la atmósfera que recibe los residuos gaseosos de los químicos utilizados en el proceso de explotación minera, tales como el cianuro y mercurio, entre otros; provocando graves repercusiones en la salud humana, como insuficiencia renal, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, trastornos en el sistema nervioso, esterilidad en las mujeres, cáncer y el síndrome de Guillain-Barré, entre otras.

Este último síndrome ha sido identificado en los recientes estudios que ha realizado la bióloga investigadora Cidia Nínive Cortés del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, en una zona del oriente de El Salvador donde se ubica el drenaje ácido de minas que utiliza la empresa transnacional Commerce Group de capital estadounidense.

Dicho estudio revela, según opinión del único médico especialista en El Salvador sobre dicha enfermedad, corroborada por artículos científicos, que este síndrome puede ser causado por la presencia de metales pesados encontrados en la sangre de las personas, tales como manganeso, arsénico, entre otros, tal y como lo están demostrando las investigaciones científicas que se están realizando en la zona de San Sebastián.

Criminalización y resistencia

Toda la problemática minera generada en los países de la región centroamericana ha desatado una serie de conflictos sociales, entre familias y habitantes de las comunidades en donde se localizan estos proyectos. En ese contexto se ha organizado y movilizado un importante sector de la población configurando un movimiento de resistencia anti minera, que ha sido criminalizado, llegando incluso a amenazas, encarcelamiento y, en el peor de los casos, a asesinatos de líderes y lideresas de la resistencia anti minera.

Estos últimos casos se vivieron en las zonas de Cabañas y Chalatenango en El Salvador; Valle de Siria en Honduras; Mina Marlín y Fénix en Guatemala y comunidades indígenas de Panamá, por mencionar algunos ejemplos. En todos estos casos de criminalización de la resistencia anti minera las autoridades estatales han guardado silencio y no se ha llegado a determinar en ninguna instancia judicial la corresponsabilidad de las empresas transnacionales en estos crímenes, ni siquiera a nivel de investigación.

Es necesario resaltar que la resistencia anti minera ha alcanzado un nivel de organización y de incidencia a nivel nacional, provocando una intensa presión social hacia los tomadores de decisiones para que se culmine con una prohibición de la minería metálica en los países centroamericanos.

Tal es el caso de Costa Rica, en donde se produjo durante el año 2010 una fuerte campaña en contra del proyecto minero Crucitas, el cual, además de representar una gran amenaza al agua, medio ambiente y salud humana, también amenazaba con desencadenar un conflicto binacional entre Costa Rica y Nicaragua, ya que podía contaminar el Río San Juan, cuya cuenca es compartida por las dos naciones. Dicha campaña en contra del proyecto minero logró incluso que el Congreso reformara la ley de minería, estableciendo en ella la prohibición tanto de la exploración como de la explotación de minería metálica.

En Guatemala hay un proceso de resistencia en contra de la minería metálica, el cual se manifiesta en la organización y movilización, principalmente de comunidades indígenas, las cuales reivindican su derecho a ser consultadas en la toma de decisiones libres e informadas en torno a los proyectos mineros, pese a todos los obstáculos que el Gobierno central está implementando. Ante esto y casi por unanimidad, la población se está declarando abiertamente en contra de dichas medidas.

En general, a pesar de haber sufrido asesinatos en las comunidades, se acrecienta la organización y la exigencia de una nueva legislación minera en la que, si bien hay varias iniciativas, prevalece la que exige el derecho de los pueblos a rechazar y no permitir los proyectos mineros en las comunidades, frente a una coyuntura de elecciones presidenciales en donde, a excepción de una candidata, todos los demás candidatos a la presidencia han manifestado en más de una ocasión su apoyo a la minería metálica.

En Honduras existe un movimiento de resistencia anti minero conformado por una diversidad de sectores, que incluyen a una parte de la Iglesia Católica, que propone la reforma de la ley de minería. En esta reforma de ley no se plantea la prohibición de la minería sino más bien elevar las exigencias y controles de parte del Estado a la industria minera en este país, lo cual, sin embargo, es considerado insuficiente por un sector importante de la resistencia a la minería.

Esta lucha no logra una correlación favorable de fuerzas, generando así incertidumbre en la resistencia anti minera, porque no se ven condiciones propicias para lograr una ley que beneficie a la mayor parte de la población. Por el contrario, tanto las autoridades centrales como la mayoría de los diputados se inclinan hacia los intereses de las transnacionales mineras, que solo están esperando que se resuelva la moratoria declarada por el ex presidente Manuel Zelaya para desarrollar todos los proyectos mineros que tienen pendientes en este país centroamericano.

En el caso salvadoreño, la lucha es por conquistar una nueva ley de minería que prohíba la explotación minera metálica, propuesta que ha venido en ascenso en la lucha de la resistencia anti minera, la cual ha ganado cada vez más la voluntad política incluso del presidente de la República y de algunos diputados de la Asamblea Legislativa.

Dicha decisión, según el Gobierno, está en función de los resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica, que se está realizando a solicitud del Ministerio de Economía, en la que hay expectativas de que ésta pueda demostrar la inviabilidad del desarrollo de la industria minera metálica en El Salvador, considerando, entre otros factores, la estrechez territorial, la densidad poblacional y la ubicación de los proyectos mineros sobre las pocas zonas de recargas acuíferas que aún existen en el país.

Finalmente, toda la problemática que genera la explotación minera en Centroamérica, ha trascendido de los territorios nacionales, puesto que cada vez más los proyectos mineros se están asentando en zonas aledañas a las cuencas compartidas entre dos e incluso tres países de la región. Y además, en el peor de los casos, las legislaciones no contemplan regulaciones más allá de los territorios nacionales y, por tanto, no contemplan la posibilidad de analizar las problemáticas con el resto de países involucrados.

Lo anterior abre la posibilidad de que se desencadenen conflictos binacionales o trinacionales, tanto en comunidades como entre gobiernos, unos defendiendo su agua y calidad de vida y otros su supuesta soberanía, que no reconoce el derecho de los pueblos vecinos. Tal es el caso de Guatemala con su proyecto minero Cerro Blanco y el proyecto Marlín, los cuales afectan cuencas compartidas entre Guatemala y El Salvador, y Guatemala y México, respectivamente.

Honduras, por su parte, contempla 42 proyectos en la zona sur de ese país, la cual abarca las cuencas de los ríos Lempa, Goascorán, Sumpul y el golfo de Fonseca, que son de las más im-

portantes de El Salvador, las cuales comparten El Salvador, Honduras y Nicaragua en algunos casos. Estas cuencas se encuentran amenazadas por 21 proyectos mineros de Honduras.

Estos potenciales conflictos, también presentan la posibilidad de agregar un elemento en la agenda de integración centroamericana para discutir la solución de problemas ambientales que aquejan a la región, y que, por supuesto, deben ser resueltos de forma articulada entre los países, teniendo como base el derecho de los pueblos al acceso al agua limpia y por consiguiente, a una mejor calidad de vida.

En definitiva, estamos viendo un momento histórico de crisis en el que la naturaleza empieza a manifestarse, y los Estados no salen al encuentro de las necesidades humanas, más bien perfilan sus intenciones de favorecer al gran capital transnacional minero, a costa de conflictos transfronterizos, asesinatos y el derecho a la vida. En ese sentido, la resistencia anti minera debe asumir su rol de defensora de la naturaleza y de la vida humana, demostrando que cuanto más se sabe del oro, menos deslumbra su brillo. ◀

Estrategia de seguridad, política fiscal y endeudamiento

Jorge Coronado Marroquín

No es un misterio para nadie que Centroamérica se ha convertido en una de las regiones más inseguras del planeta. El Informe de Desarrollo Humano del PNUD así lo constata al señalar a la región centroamericana con la más alta tasa de homicidios de América Latina y tres veces más que la tasa mundial, hablamos de 33.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. A ello hay que sumarle el accionar de los carteles de la droga tanto mexicanos como colombianos que han migrado a la región centroamericana, profundizando la violencia existente y el accionar también de bandas del crimen organizado que no sólo se dedican al negocio de las drogas, sino también al robo de vehículos, trata de personas, prostitución, contrabando, etc.

Vinculado directamente al negocio de las drogas y del crimen organizado, se encuentran el incremento del lavado o blanqueo de dinero y diversos delitos financieros. Está considerado que Costa Rica, Guatemala y Panamá, son los países en la región donde más han proliferado este tipo de delitos financieros. Un elemento obligado a señalar es cómo el narcotráfico y el crimen organizado han ido penetrando tanto los sistemas judiciales, a los cuerpos policiales y a los partidos políticos, no sólo con financiamiento de candidaturas, sino que en muchos casos, colocando sus propios candidatos, en el caso de los sistemas judiciales con el pago a jueces y fiscales y en el caso de

los órganos policiales, con oficiales de distinto rango al servicio de las bandas delincuenciales.

Cumbre Presidencial

Es en ese contexto que se realiza el pasado 21, 22 y 23 de Junio del presente año en la Ciudad de Guatemala la Cumbre Presidencial de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica a la que asistieron los presidentes centroamericanos además del presidente de México, Felipe Calderón, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y la secretaria de estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, junto con la participación de 50 organizaciones internacionales.

El evento principalmente permitió dar a conocer la presentación de la Estrategia de Seguridad que consta de cuatro ejes de acción: combate al delito; prevención de la violencia; rehabilitación/reinserción/seguridad penitenciaria; y fortalecimiento institucional. Estos cuatro ejes se concentran en 22 proyectos que en su conjunto tienen un costo cercano a los seis mil millones de dólares, según los mismos datos oficiales.

Podríamos hacer una evaluación de dicha estrategia de seguridad en la vertiente de la política militar estadounidense para América Latina, dado además lo sugerente de que estuvieran presentes en la Cumbre, los presidentes de Colombia y México, dos pilares fundamentales de la política militar norteamericana para la región. Pero por interés particular de este artículo, vamos a priorizar el análisis en la dirección del impacto fiscal y de endeudamiento externo para la región que representa dicha estrategia. No porque sea más importante, sino simplemente por un asunto de énfasis en el análisis.

La primera pregunta que surge es en torno a las implicaciones económicas de dicha Estrategia de Seguridad para una región como la nuestra, con altos índices de pobreza, con bajísimas cargas tributarias y siendo una de las subregiones más impactadas por la crisis mundial, particularmente por la crisis de los Estados Unidos, que tiene a las distintas eco-

nomías pasando por períodos de contracción o, como dicen los economistas, en el mejor de los casos de ralentización de las mismas.

De los 6.000 millones de dólares presentados, concretamente se alcanzaron compromisos por 2.000 millones que tal como señaló a los medios de comunicación el canciller guatemalteco, Haroldo Rodas, un 80% de los mismos son líneas de créditos de la banca multilateral y el resto cooperación no reembolsable de carácter técnico e inversión.

El desglose de dichos compromisos es el siguiente: 1.000 millones de dólares del Banco Mundial (BM), 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 300 millones de dólares de un préstamo bilateral de los Estados Unidos, 25 millones de dólares de un préstamo bilateral de Australia y 175 millones de dólares de préstamos bilaterales de España, Canadá y otros organismos multilaterales e internacionales.

Estamos hablando de un incremento importante del endeudamiento externo regional, que en un momento de crisis como el actual, lo que hace es acentuar la vulnerabilidad regional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha planteado desde el 2010 que dos de las principales limitaciones o vulnerabilidades de la región centroamericana son sus altos índices de déficits fiscales que los hacen más elevados que los promedios de América del Sur y su baja carga tributaria que oscila entre el 10 y el 15% del PIB de cada país.

Ante un constante crecimiento de las deudas públicas y privadas en cada país, la noticia de un incremento tan fuerte de endeudamiento externo lo que hace en primera instancia es prender las alarmas, aún bajo el supuesto de que el fin de la lucha contra la inseguridad es una urgencia regional.

El debate de fondo es que el tema de la inseguridad en Centroamérica tiene varios orígenes, empezando por lo que fue toda la estrategia de contrainsurgencia militar impulsada por los Estados Unidos y los regímenes militares cen-

troamericanos durante las décadas de los 70 y 80; luego la estrategia militar de los Estados Unidos contra los cárteles del narcotráfico en Colombia y México, que provocó que éstos trasladaran sus bases de operaciones a Centroamérica y finalmente lo que señaló el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, que el 83% de la droga que transita por Centroamérica es consumida en Estados Unidos y el otro 17% se consume en Europa.

Es por tanto muy sugerente que en ese contexto, tanto la secretaria de estado Hillary Clinton, como el subsecretario de estado estadounidense Arturo Valenzuela, trasladaran a la región toda la responsabilidad del combate al narcotráfico y al crimen organizado. El subsecretario de estado dijo explícitamente "Estados Unidos no está dispuesto a incrementar sus desembolsos a programas de seguridad en Centroamérica en parte porque hay países de la región en donde la recaudación fiscal es demasiado baja"¹.

Por otra parte, la secretaria de estado Hillary Clinton condicionó claramente a dónde van los 300 millones de dólares que prestará su país: "nuestras inversiones brindarán apoyo a unidades especiales de policía; al Observatorio Regional de Criminalidad del SICA para mejorar tecnología, datos e inteligencia; apoyo para capacitar a jueces y fiscales y un fondo para impulsar la reforma fiscal"².

Finalmente lanzó su frase contundente, "las empresas y los acaudalados de cada país tienen que pagar su parte justa de impuestos y convertirse en socios con participación plena en un esfuerzo de toda la sociedad"³.

Negativa a pagar impuestos

En consonancia con las declaraciones de los altos personeros del gobierno estadounidense, el presidente guatemalteco, Álvaro Colom, al finalizar la Cumbre propuso la necesidad de que los ministros de finanzas de toda la región estudiaran la posibilidad de crear un impuesto para la seguridad y contra el crimen organizado aplicable a toda Centroamérica, adicional a aquellos impuestos que para tal fin ya tengan establecidos algunos países. Señaló: "*Es un compromiso que dentro de la reforma fiscal de cada país se incluya el impuesto para la seguridad*"⁴.

A pesar de las presiones del gobierno estadounidense y del acuerdo de la Cumbre de incorporar propuestas fiscales que permitan financiar el combate al narcotráfico y al crimen organizado, la sola propuesta de crear un impuesto específico para dicho fin ha provocado reacciones contrarias de diversos sectores y realmente muy poco se ha avanzado.

De inicio la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO) rechazó la idea de un impuesto centroamericano para mejorar la seguridad en la región. "*Sólo cuando se tiene poca conciencia de la difícil realidad económica y de inseguridad que vivimos los centroamericanos es que se puede afirmar que en medio de esta crisis, resulta conveniente aumentar impuestos, sobre todo cuando son los sectores productivos los que mantienen a flote durante una crisis a las economías emergentes*"⁵. En su lugar, pidieron racionalizar el gasto público, combatir la evasión fiscal y combatir la corrupción.

1 Periódico *La Prensa Libre*, Ciudad de Guatemala. "Colom propondrá impuesto regional para seguridad". página 6. 22 Junio 2011, Ciudad de Guatemala.

2 Discurso de la secretaria de estado Hillary Rodham Clinton en la Conferencia de Seguridad de América Central. 22 Junio 2011. Hotel Westin Camino Real, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

3 Ibid.

4 Periódico *La Prensa Gráfica*, El Salvador. Centroamérica analiza impuesto de seguridad para enfrentar crimen. 24 Junio 2011. <http://www.laprensagrafica.com/internacionales/centroamerica/200936-centroamerica-analiza-impuesto-de-seguridad-para-enfrentar-crimen.html>

5 Comunicado Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO). El Salvador. <http://www.dca.gob.gt/es/20110713/Istmo/2655/Rechazan-impuesto-para-el-plan-de-seguridad-del-Istmo--%7C-El-Salvador-%7C.htm>

En el caso de El Salvador el Presidente Mauricio Funes anunció la creación de un impuesto al patrimonio a fin de financiar el combate a la delincuencia, el impuesto sería aplicable a personas y empresas locales y extranjeras que tengan como mínimo un patrimonio neto de \$500 millones de dólares⁶. Mencionó el Presidente Funes que no serían más de 2.000 personas naturales y/o empresas las que terminarán pagando el nuevo tributo con el que se pretende recaudar alrededor de \$120 millones anuales entre el 2011 y el 2014.

Ante el sólo anuncio, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) manifestó su total oposición asegurando que el impuesto *“castigará la inversión y el empleo con lo cual la economía se contraería más”*⁷. O como mencionó el consultor tributario Maximiliano Mojica *“el nuevo tributo no será sólo para millonarios ni será temporal, terminará siendo confiscatorio, generará desempleo y lo pagaremos todos los salvadoreños porque provocará mayor inflación”*⁸. Finalmente, el 8 de julio el gobierno y la cúpula empresarial lograron un acuerdo tendiente a que primero el gobierno elaboraría el plan para combatir la delincuencia para discutirlo con ellos y luego se verá la pertinencia del impuesto. O lo que es lo mismo todo quedó en una simple idea.

En el caso de Honduras, el Gobierno de Porfirio Lobo convirtió el proyecto de “Tasa de Seguridad” en un paquete de reformas tributarias. Este paquete, aprobado a finales de junio, estará vigente hasta el 2016 y se denomina “Ley Temporal de Seguridad Poblacional”. Se espera que se recauden 400 millones de dólares en cinco años. Empezará a regir a partir de agosto

6 El Ministro de Hacienda Carlos Cáceres ha mencionado que el patrimonio se establecerá al restar todos los activos que incluyen bienes inmuebles, acciones y otros títulos valores y los pasivos debidamente comprobados.

7 Semanario *El Financiero*. “Delincuencia limita impuesto. El Salvador, Empresarios exigen plan de seguridad como requisito para tributo al patrimonio”. № 828. 25 al 31 Julio 2011. Página 37. San José, Costa Rica.

8 Ibid.

gravando con un 5% las cuentas bancarias con saldos promedio superiores a los \$5.000 dólares; en un 21% el volumen de ventas de telefonía celular; en 0.05% los ingresos brutos de las comidas rápidas⁹; en 5% las exportaciones mineras y en un 1% las operaciones de los casinos. Los recursos obtenidos se colocarán en dos fideicomisos, uno para políticas de seguridad pública y otro para programas sociales.

Inmediatamente después de su aprobación, Santiago Ruiz, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), calificó las medidas como *“inoportunas e inaceptables que retrasarán la reactivación económica que se esperaba”*¹⁰. Incluso la Barra de Abogados Anticorrupción anunció la impugnación de la Ley. Luego de varios meses de protestas de los sectores empresariales, a mediados del mes de septiembre el Congreso hondureño terminó aprobando una modificación a la Ley de acuerdo a los intereses del sector empresarial. Se redujo el gravamen de 5% a un 2% sobre las exportaciones brutas de minerales y se eliminó el cargo de 3% a las operaciones de retiros de cuentas de ahorros.

En el caso de Nicaragua, desde el mes de julio el ministro de Hacienda, Alberto Guevara, había señalado que no consideraba conveniente cargar a los empresarios con un nuevo impuesto y en su lugar señaló que era preferible mejorar la eficiencia con los recursos tributarios y que dicha mejora se destine a la policía, el ejército y las instituciones de seguridad.

Por otra parte, en Costa Rica, a principios del mes de agosto la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un impuesto de 300 dólares anuales a las sociedades anónimas a fin de financiar programas de seguridad ciudadana;

9 Recuérdese que en el caso de Honduras la venta de comidas rápidas y bebidas fueron exoneradas del pago total de impuestos desde su creación en los años 90 para incentivar el comercio y la llegada de franquicias.

10 Semanario *El Financiero*. “Aplican segunda reforma fiscal. Honduras cubriría desfase financiero” № 828. 25 al 31 Julio 2011. Página 38. San José, Costa Rica.

esperan recaudar aproximadamente 120 millones de dólares anuales y lo tendrán que pagar cerca de 55.000 sociedades anónimas que aparecen inscritas. Actualmente el proyecto está en estudio de la Sala Constitucional a fin de establecer si tiene o no roces constitucionales.

Panamá, por intermedio del Ministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, afirmó que no están pensando en crear ningún impuesto para financiar sus planes de seguridad.

En Guatemala, aunque su presidente fue el impulsor de la idea del impuesto centroamericano, a la fecha no se ha propuesto ninguna iniciativa concreta, solamente a principios de septiembre se hablaba de un impuesto al turismo, específicamente elevar de \$30 a \$45 dólares el impuesto a los boletos aéreos a fin de pagar un préstamo de \$170 millones dólares para compra de seis aviones Súper Tucanos, tres radares israelitas y el software C4i (denominado también Comando, Control, Comunicaciones, Computación e Inteligencia), con el cuál establecerían un sistema de monitoreo y rastreo de todo el territorio nacional por aire, tierra y mar.


Algunas conclusiones

Como conclusión, lo que queda evidente es que en el tema de la lucha por una mayor seguridad en la región, por más discursos que se planteen a nivel internacional de que es una responsabilidad compartida, la tarea le queda básicamente a cada país centroamericano en concreto. También queda en evidencia que la Estrategia de Seguridad Centroamericana significará principalmente un mayor endeudamiento externo de la región con los organismos financieros internacionales; ello es preocupante en momentos en que la crisis global sigue impactando fuertemente a nuestra región.

Pero principalmente lo que queda en evidencia es la permanente irresponsabilidad de los políticos centroamericanos que luego de asumir compromisos públicos en torno al combate al narcotráfico y al crimen organizado, no asumen responsabilidades nacionales por

diseñar e impulsar planes reales de seguridad ciudadana dotados de recursos propios. Casos como los de Guatemala, Honduras y El Salvador, en los que las estadísticas de homicidios, robos, violaciones, peso de los cárteles de la droga, etc. son alarmantes, es una absoluta irresponsabilidad la ausencia de políticas y de acuerdos nacionales.

Particular papel hay que asignarles a los sectores empresariales centroamericanos que frente a este tema han venido señalando que el deterioro de la seguridad en la región, nos coloca en una situación de pérdida de competitividad. Cuando se plantea la necesidad de destinar recursos a la lucha por una mayor seguridad y de captarlos por medio de impuestos, han salido unánimemente a oponerse. Y en aquellos países en donde concretamente se han promovido iniciativas de impuestos, han logrado detenerlas como ha sido el caso de El Salvador, han reducido al mínimo el tipo de impuestos que están dispuestos a pagar, como el caso de Honduras, o han detenido la aprobación como es el caso de Costa Rica. Queda en evidencia el doble discurso de este sector que clama porque los gobiernos les protejan sus negocios, pero que dicha seguridad la paguen los consumidores, no ellos.

Esa es la realidad de esta región centroamericana que, en materia de seguridad, pareciera seguirá siendo terreno fértil para la delincuencia organizada, aunque en nombre de la lucha contra dicha delincuencia se seguirá endeudando irresponsablemente a nuestros países y no se abordarán tampoco políticas tributarias y fiscales orientadas a que aquellos sectores con mayores capacidades aporten al conjunto de la sociedad en la lucha por hacer de Centroamérica una región de mejor calidad de vida y mayor seguridad para su ciudadanía. 

Jorge Coronado Marroquín es miembro de la Comisión Nacional de Enlace (CNE) de Costa Rica y representa a la CNE en las redes LATINDADD y Alianza Social Continental. Es sociólogo y entre otros cargos se desempeña como analista en temas de Justicia Fiscal en Centroamérica para la red LATINDADD.

Más intervención militar estadounidense

Laura Carlsen

El modelo de guerra contra el narcotráfico define al tráfico de las drogas como amenaza a la seguridad nacional, y equipara esta actividad con la violencia, como si fueron sinónimos y sin analizar la relación particular y compleja entre los dos.

La guerra contra las drogas “Made in USA” llega a Centroamérica

En el año 2007 empezó una nueva fase de militarización en Centroamérica, bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico y promovida por el gobierno de los Estados Unidos. Después de apoyar a las guerras sucias contra la izquierda en el contexto de la guerra fría, entre 1993 y 2007 la ayuda estadounidense a la región cayó a la tercera parte del periodo anterior, con una baja notable en la ayuda militar. La tendencia se revirtió con el inicio de la Iniciativa Mérida (IM).

La “Iniciativa de Seguridad Regional Contra el Terrorismo y el Narcotráfico y para la Seguridad Fronteriza”, diseñado por el entonces presidente Bush, incluyó a Centroamérica casi como un apéndice del plan para México, que tuvo como objetivo principal lograr un nivel sin precedentes históricos de participación estadounidense en la seguridad nacional de su vecino del sur. En su primer año (2008) la IM asignó sólo \$65 millones de dólares a los países centroamericanos de un total de \$465 millones. Sin embargo, con la Iniciativa Mérida se estableció el modelo de cooperación en temas de seguridad: militarización en nombre del combate frontal a las cárteles de la droga, enfocado en la interdicción y aplicación de las leyes prohibicionistas; medidas de represión social; y control de las fronteras para la prevención e interdicción de contrabando, incluyendo personas migrantes.

El monto fue subiendo hasta que en el año 2010

la cooperación EEUU-Centroamérica en materia de seguridad se independizó del desastre en que se había convertido la Iniciativa Mérida y nació la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI, por sus siglas en inglés) con la financiación de \$260 millones inicialmente. Según un informe para el Congreso EEUU, CARSI provee equipo militar y de inspección, armas, chalecos anti-balas, herramientas para identificar drogas, computadoras, y otro equipo, además apoya la formación de unidades especializadas de investigación, unidades contra pandillas bajo la dirección del FBI, y unidades seleccionadas y entrenadas por la DEA, ICE y el Departamento de Estado.

Consecuencias de la guerra contra el narcotráfico

El modelo de guerra contra el narcotráfico define al tráfico de las drogas como amenaza a la seguridad nacional, y equipara esta actividad con la violencia, como si fueron sinónimos y sin analizar la relación particular y compleja entre los dos. Las consecuencias de enfocar esfuerzos en los ataques al crimen organizado, utilizando a fuerzas estatales corruptas y sin el respaldo de instituciones capaces de garantizar el estado de derecho han sido trágicas en México: casi 50,000 muertos y miles de desaparecidos y violaciones a los derechos humanos. Las consecuencias en los países de Centroamérica -sobre todo el llamado “triángulo norte” de Guatemala, Honduras y El Salvador que enfrenta crisis de violencia de múltiples raíces- lógicamente sería igual o peor debido a la debilidad de sus instituciones y la corrupción.

Por otro lado, las políticas de seguridad basadas en la respuesta militar al crimen presentan un grave peligro en una región que ha vivido bajo dictaduras y ocupaciones militares en un pasado no tan remoto. La guerra contra el narcotráfico

amenaza con re-militarizar los países centro-americanos y poner en riesgo los avances en la construcción de la paz. Algunos ejemplos:

En Guatemala, después de haber reducido el ejército a sólo 15,000 efectivos, como parte de los acuerdos de paz, se ha incrementado a 20,000 y las tropas ahora participan en capacitación para tareas en territorio nacional. Dependiendo en parte de las elecciones presidenciales, se espera que siga al alza el número de soldados y su participación en la lucha contra el crimen y se prevé el resurgimiento de grupos paramilitares. El presidente Álvaro Colom ha declarado el estado de sitio dos veces en los últimos meses, con suspensión de derechos civiles y ocupación del ejército de distintas regiones.

En Honduras la militarización ha sido uno de los resultados más notables del golpe de Estado de junio 2009, junto con la violencia y la represión. Bajo el gobierno de Porfirio Lobo, quien fue elegido en elecciones organizadas por los golpistas, se ha construido la relación de cooperación anti-narcóticos más estrecha con EEUU en toda la región, con dos visitas del jefe del Comando Sur en un año, la instalación de una segunda y ahora se habla de una tercera base militar estadounidense en el país, y varios acuerdos y memorando de cooperación firmados. A la vez, el país sufre del índice de homicidios más alto de la región, asesinatos continuos de miembros de la oposición, y un alza notable en las actividades del narco.

Costa Rica, a pesar de no contar con ejército, no está exento al proceso de militarización. El gobierno costarricense aceptó la presencia de buques de guerra de EEUU y labores de tropas estadounidenses en territorio nacional, y también autorizó que los policías utilizaran armas de guerra, medida que fue anulada por anti-constitucional por las cortes. Estas medidas y su participación en maniobras militares regionales coordinadas por EEUU ponen en entredicho el compromiso histórico del país con la construcción de la paz y el rechazo al conflicto armado.

Actualmente, el Plan Centroamérica, como se podría llamar la estrategia en su conjunto, se está ampliando desde los acuerdos bilaterales a los programas regionales en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

En una reunión de 23 de junio con presencia de la secretaria del Estado Hillary Clinton¹ se trazó un plan regional con fondos principalmente de EEUU y el BID. Los nuevos programas tienen elementos de prevención y fortalecimiento de instituciones, sin embargo, estos aspectos son menores frente a los rubros de equipo y entrenamiento para el combate al narcotráfico.

La visión de mediano plazo de EEUU es crear una zona de seguridad mesoamericana, como contraparte del Proyecto Mesoamérica, de la misma manera en que la IM se creó en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La militarización de la región facilita la represión de movimientos de oposición y el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas por los objetivos esbozados en el Proyecto Mesoamérica: la expansión de la minería, de los monocultivos y del comercio internacional. Esta estrategia fue explicada por William Brownfield del Departamento de Estado cuando dijo que debería llamarse "la Iniciativa Mesoamericana porque no se puede considerar el tema que involucra a los 7 gobiernos de Centroamérica sin incorporar los gobiernos de Colombia y México en la solución." Afirmó en Washington que la Iniciativa Mérida y el Plan Colombia son "modelos de cómo cooperar de una manera multilateral para enfrentar amenazas multilaterales", a pesar de que los dos planes son básicamente bilaterales y diseñados en Washington.

En gran parte como resultado de estos planes, México y Colombia son los dos países de América Latina con los peores índices de violaciones de derechos humanos, desplazamiento y muertes relacionados a la lucha anti-drogas, a la vez que siguen siendo los principales países de producción y tránsito de drogas en el hemisferio. Si los países centroamericanos siguen el mismo camino, es predecible que tanto la violencia como la intervención del gobierno de EEUU irán en aumento. ◀

Laura Carlsen, analista y escritora, es directora del Programa de las Américas en la Ciudad de México.

1 <http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/te xttrans/2011/06/20110623125007x2.171814e-03.html#axzz1X6WaiyQE>

Honduras:

Colonialismo, militarismo y presencia extranjera

COPINH

La militarización en Honduras, como en todo el continente, se inició con el acto brutal y violento de la conquista, y continuó con la cruzada de colonización y “evangelización”, en cuyo marco se ejecutó el mayor genocidio de la historia, pretendiendo destruir a nuestras poblaciones originarias, saqueando los bienes de la naturaleza y destruyendo la Madre Tierra.

A partir de la Independencia, la dominación continuó bajo otras formas. Los sectores liberales locales abrieron la economía al ingreso del capital extranjero para el cultivo del café, del banano, el desarrollo de la minería, a lo que se fueron agregando los cítricos, la industria forestal, la palma africana, la industria turística, entre otras. Simultáneamente con la apertura a los grandes capitales extranjeros, se crearon las fuerzas militares y policiales para “protegerlos”. Militarismo y colonización son dos caras de la misma moneda.

Desde 1854 en Honduras ha habido gobiernos serviles a EE.UU. que firmaron acuerdos y produjeron muchas ganancias para las compañías bananeras. Ya en 1903 desembarcaron los marines en nuestro territorio, para “velar por los intereses norteamericanos”. En 1907 se estacionaron tropas estadounidenses en varias ciudades hondureñas. Las invasiones se sucedieron en 1911, 1912, 1919, 1924, y 1925... El escritor Froylán Turcios y la dirigente del movimiento de mujeres, Visitación Padilla, se destacaron en la organización de las acciones cívicas para enfrentar la presencia militar norteamericana en el país. Doscientos marines fueron expulsados entonces de Tegucigalpa, gracias a la estrategia del “boletín defensa nacional” que organizaron junto con otros y otras.

A este triunfo de la resistencia popular antimperialista le siguió otro muy importante, años más tarde -en 1954- cuando los trabajadores bananeros lanzaron una huelga que se extendió prácticamente a la totalidad de los trabajadores del país, desafiando a la United Fruit Co. y a la Standard Fruit Co. que controlaban la economía y la política hondureña y centroamericana. A pesar de que recibieron como respuesta una durísima represión, lograron un importante conjunto de conquistas. A partir de entonces las multinacionales presionaron para que se garantizaran sus altas ganancias basadas en la enorme explotación de los trabajadores.

En ese año se firmaron los acuerdos militares de cooperación entre las FF.AA. de Honduras y los EE.UU -el Convenio Bilateral de ayuda militar- y se sentaron las bases de las Fuerzas Armadas de Honduras.

También en el 54, desde las propiedades de la United Fruit Co. en el norte de Honduras se lanzó la invasión contra la Guatemala de Jacobo Arbenz. Dos años después -en 1956- las FF.AA. dieron su primer golpe de Estado, al que le siguieron otros: en 1963, 1972, 1975, 1978, 1980 y 1989. El golpe cívico militar contra Manuel Zelaya fue el séptimo de esa cadena de intervenciones violentas de la oligarquía local y el imperialismo yanqui en la historia hondureña.

A fines de los 70 el triunfo de la revolución nicaragüense llevó a EEUU a replantear su estrategia para Centro América. Los ajustes en la concepción se reflejaron en los documentos de Santa Fe I y II y en el Informe Kissinger. En el contexto de la guerra fría, se ubicaba a Centroamérica como territorio de disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Reagan trató de contrarrestar la supuesta “influencia sovié-

29

tica" en Nicaragua, utilizando políticamente a Costa Rica, y militarmente a Honduras.

En 1983, comandado por el embajador norteamericano John Negroponte, principal artífice del terrorismo en Centro América, se convirtió al territorio hondureño en una gran base militar de operaciones contrainsurgentes para enfrentar al sandinismo, a las guerrillas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador y a la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

En los años 80 se terminó de construir la base militar de Palmerola, que fue activada durante la administración de Ronald Reagan, durante las maniobras militares de Pino Grande III. Palmerola fue utilizada por el Coronel norteamericano Oliver North como base de operaciones de la "contra". Estados Unidos tenía allí entonces más de 5000 soldados. Fue creada en el marco de la guerra de baja intensidad que significó un conjunto de crímenes de lesa humanidad, como la matanza del río Sumpul, el 14 de mayo de 1980.

Actualmente, el Pentágono ha convertido a Soto Cano como "autoridad central coordinadora de las fuerzas militares de los Estados Unidos actuando en la región de Centroamérica". La Fuerza de Tarea Conjunta (Joint Task Force) Bravo "mantiene reservas previamente situadas para operaciones militares en una área extensa", y opera en otros países centroamericanos además de Honduras, por ejemplo con helicópteros y tropas desplegados en la base de las Kaibiles (fuerzas guatemaltecas especiales) en Poptún, Petén y en operaciones contra las drogas en Guatemala¹. Fue precisamente por la base de Palmerola por la que los golpistas se llevaron secuestrado a Mel Zelaya el 28 de junio del 2009.

30

La participación norteamericana en el golpe de estado ha sido evidente. Es sabido que el embajador norteamericano en Honduras al momento del golpe, Hugo Llorens, -cubano-americano de la mafia de Miami-, participó de

reuniones donde se discutieron los planes para el mismo. Desde hace un año lo venían planificando, desarrollando una campaña mediática prácticamente desde el día en que tomó posesión Zelaya.

Por otra parte, por lo menos 19 importantes miembros del batallón hondureño 3-16 -entre ellos cuatro de los cinco oficiales hondureños- se graduaron de la Escuela de las Américas (SOA por su sigla en inglés), hoy convertida en Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (en inglés Western Hemisphere Institute for Security Cooperation □ WHISC). Entre estos "graduados" se encuentran el general Romeo Vázquez Velásquez -jefe de las FFAA cuando el golpe de estado contra Zelaya-; el jefe de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince Suazo; el General Nelson Willy Mejía Mejía, designado en el golpe como director de inmigración -quien obtuvo de Estados Unidos la Medalla de Servicio Meritorio por haber sido oficial de inteligencia del Batallón 3-16-; el Coronel Herberth Bayardo Inestroza Membreño, abogado del ejército. Como director de relaciones públicas del ejército estaba el teniente coronel Ramiro Archaga Paz; y el dos veces graduado en cursos de SOA, el coronel Jorge Rodas Gomero, ministro de Seguridad del gobierno de Zelaya, que siguió en el cargo con los golpistas. Entre 2001 y 2008, la «Escuela de las Américas» entrenó a 431 oficiales hondureños².

Actualmente se siguen formando militares y policías en las técnicas de represión y tortura. Se ha denunciado a través de diferentes medios la existencia, desde el año 2005, de una rama salvadoreña de la Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés), que forma parte de una red de Academias Internacionales de Policía, creadas en 1995 por Clinton "para luchar contra el tráfico internacional de drogas, la delincuencia y el terrorismo mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional"³.

1 Información producida por la Fellowship of Reconciliation, en septiembre de 2011. Escrito por John Lindsay-Poland.

2 Periódico Juventud Rebelde. Cuba. <http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2009-07-19/otto-reich-detras-del-golpe-de-estado-en-honduras/>

3 Los Nuevos Horizontes son, según el Comando Sur Naval de los EUA, "misiones de ayuda humanitarias y

Después del golpe de estado

El golpe de estado fue resultado de una alianza de los sectores oligárquicos que representan a los más ricos del país, que mantenían relaciones estrechas con los intereses norteamericanos, y se sentían amenazados por las transformaciones que anunciaba el gobierno de Mel Zelaya. Entre ellos se encuentran Miguel Facussé y Freddy Nazar. Se apoyan en sectores religiosos fundamentalistas como el Opus Dei.

El golpe de estado significó un reforzamiento del militarismo, de sus estructuras operativas, de su lógica de dominación. Se aumentó el número de soldados en el ejército, y se incrementó abiertamente la ocupación militar de Estados Unidos instalándose nuevas bases militares y realizándose sistemáticamente ejercicios como “Nuevos Horizontes”⁴, **Panamax**⁵, y el **Plan Mérida** -un proyecto “de seguridad” establecido entre los gobiernos de Estados Unidos, México, y los países de Centroamérica y el Caribe, para “combatir el narcotráfico y el crimen organizado”, muy similar al Plan Colombia. Presentado como una iniciativa contra el narcotráfico, fue ampliado en sus alcances por los Estados Unidos, como “acuerdo antiterrorista”.

Inmediatamente después del golpe se abrieron

civiles diseñadas para promover la buena voluntad y mejorar las relaciones entre los Estados Unidos y la nación organizadora”.

4 Ejercicios multinacionales de entrenamiento militar. Entre sus objetivos se encuentran: operaciones marítimas, aéreas, terrestres, de espacio y cibernéticas.

5 La NED fue creada por el Presidente Reagan en 1983, a raíz de las revelaciones negativas sobre la CIA que se hicieron en la segunda mitad de los años setenta. Se transfirieron muchas de las operaciones encubiertas que hacía la CIA a una nueva organización: La Fundación Nacional para la Democracia. La idea era que la NED hiciese de manera abierta lo que la CIA había estado haciendo por décadas de manera encubierta, esperando así eliminar el estigma asociado con las actividades encubiertas de la CIA. Fragmento del Capítulo 19 de *Rogue State. A Guide to the World's Only Superpower*, de William Blum. Third edition, third printing. Common Courage Press, 2005. <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=31997>

bases militares gringas en Karataska, Mocoron y Puerto Lempira y Guanaja. Se produjo la ocupación total de los ríos Patuca y Plátano, con el pretexto del narcotráfico. Durante una visita a Honduras del general Douglas Fraser -Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos- realizada en abril del 2011, se informó de la inminente instalación de una base militar norteamericana en las Islas de la Bahía (Caribe hondureño). Denuncia John Lindsay-Poland en la Fellowship of Reconciliation, en septiembre de 2011 que los Estados Unidos financiaron la construcción de nuevas bases militares “con fondos de ‘Contra narco-terrorismo’ del Pentágono”.

Este nuevo nivel de intervencionismo se inscribe en el proceso de remilitarización del continente, que tiene, entre otros, momentos fundamentales:

- La reactivación de la Cuarta Flota, en julio del 2008, respondiendo a las órdenes del Comando Sur de los Estados Unidos.
- La autorización del parlamento de Costa Rica para el ingreso al país de 46 buques de guerra, 200 helicópteros, 10 aviones, 2 submarinos y 7 mil marines norteamericanos.

Entre los golpistas actuales participan personajes conocidos por su papel en las escuadrones de muerte de décadas pasadas, y algunos de las mafias ultraderechistas de todo el continente como Robert Carmona, vinculado con el golpe de estado contra Chávez en Venezuela, y ligado a los grupos terroristas anticubanos de Miami. También hay presencia de los grupos contrarrevolucionarios de la mafia de Miami, como Alpha 66 y de los Comandos F4.

Otra forma de intervención es el apoyo a determinadas ONGs, a las que los gringos han dado financiamiento a través de la CIA (Central Intelligence Agency), de la NED (Fundación Nacional para la Democracia)⁶, y del IRI

6 El IRI (Instituto Republicano Internacional) fue creado en 1983. Se financia 99.85% con dinero del Gobierno de los Estados Unidos. El Departamento de Estado (57%), USAID (33 %), y el National Endowment for Democracy -NED- (11 %) son casi el íntegro de los aportantes. Es una agencia política del gobierno

(Instituto Republicano Internacional)".

La USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) hizo una campaña ofreciendo a 50 o más municipios de Honduras financiamiento por el monto de 30 mil dólares a las organizaciones comunitarias y ONGs que firmaran un convenio mediante el cual la organización se sumaba a la "lucha antiterrorista" que libra los Estados Unidos.

Actualmente se está desarrollando en el Bajo Aguan la **Operación Xatruch II**, que significa la presencia de más de 1000 efectivos militares y policiales. Allí se han intensificado las operaciones de terror disuasivo por la presencia militar, policial y de centenares de guardias privados y sicarios que aterrorizan a las poblaciones campesinas y a sus organizaciones, que vienen sosteniendo una importantísima batalla por la tierra. Los militares permanecen en los principales puntos de las carreteras controlando, deteniendo, torturando, asesinando. El ejército, los paramilitares, los guardias de los terratenientes, han sido asesorados por miembros del ejército gringo, por militares y paramilitares colombianos y salvadoreños.

A esto se suma la agresión constante, las amenazas a muerte, el hostigamiento por fuerzas que son reservistas del ejército que operan como paramilitares, y por el mismo ejército y la policía, todo en contubernio con las autoridades municipales y centrales. Actúan nuevamente los escuadrones de la muerte. Se han multiplicado las -"agencias privadas de seguridad", verdaderos ejércitos manejados por la oligarquía. La llamada "guerra contra el narco" es la excusa utilizada para militarizar aún más la sociedad, especialmente a las regiones campesinas e indígenas, siguiendo el camino de Colombia y México.

32

La criminalización del movimiento indígena y negro y del movimiento campesino, es una política del régimen sucesor del golpe de estado, en particular contra el pueblo que está en Re-

de Estados Unidos para operaciones internacionales. Oscar Ugarteche- ALAI. Qué hace el IRI en Cuba y sobre todo, por qué. <http://alainet.org/active/36032> 08/02/2010.

sistencia y en construcción del proceso constituyente originario, refundacional, democrático, multicultural, multilingüe e incluyente.

A pesar de los acuerdos de "reconciliación", firmados en Cartagena de Indias, los asesinatos de hermanos y hermanas de los pueblos indígenas, de campesinos, de los sectores de la diversidad sexual, de jóvenes y de militantes de la Resistencia están impunes. No ha importado que miembros y dirigentes de organizaciones populares tengan medidas cautelares otorgadas por sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Igualmente han sido agredidos física y emocionalmente, y detenidos de manera arbitraria e ilegal.

Las radios comunitarias han sido hostigadas y amenazadas. Algunas han sido quemadas, otras saboteadas con descargas eléctricas. Human Rights Watch (organización de vigilancia de los derechos humanos) documentó el asesinato de 18 periodistas opositores del golpe y defensores de derechos humanos en 2010.

La Resistencia que continúa

A pesar de los duros golpes, los movimientos populares en Honduras siguen resistiendo la militarización y la impunidad y continúan denunciando cómo se articula el militarismo con el odio hacia las mujeres, los pueblos indígenas, la diversidad sexual y a la gente que lucha por justicia.

Junto a los esfuerzos por defender la vida, el trabajo, la salud, la educación, el derecho a la tierra, al territorio, a la identidad, la libertad de las mujeres, también se enfrenta cotidianamente la militarización y la injerencia norteamericana en nuestro país.

Se han realizado en ese sentido varios encuentros internacionales contra la militarización, así como movilizaciones a la base de Palmerola. Se están creando campamentos de observación y de solidaridad internacional en el Bajo Aguan, Zacate Grande, la Esperanza.


En estas iniciativas de encuentros e intercambios, no sólo se cuestionan los aspectos más

evidentes de la militarización, sino también las distintas maneras en que el poder ejerce el control de nuestros cuerpos, de nuestros territorios y de nuestras vidas.

El planteo de la gente, ligado a la experiencia de la Resistencia, es que estas Fuerzas Armadas deben desaparecer, ya que sólo defienden los intereses de los ricos. Estas Fuerzas Armadas que han torturado, secuestrado y jamás han defendido la soberanía de nuestro país, sino que por el contrario, se prestaron y sirvieron al golpe militar al servicio de EE.UU., que han servido a la contrarrevolución nicaragüense, para el entrenamiento de batallones asesinos de Guatemala, El Salvador, no tienen razón de existir.

En los debates por la refundación de Honduras, se está planteando una lucha contra la cultura de la militarización en todos sus sentidos y significados. En la práctica cotidiana de los movimientos sociales, esto significa desmontar las lógicas políticas que refuerzan las estructuras tradicionales del poder no solo en los lugares clásicos como las instituciones

formales sino en los ámbitos de la familia, el amor y la creación.

El reingreso de Honduras en la OEA ha significado un duro golpe para la Resistencia, ya que abre las puertas de la impunidad. Pero el movimiento social popular organizado y el pueblo de Honduras, a través de múltiples expresiones creativas, con OEA o sin OEA, continúa resistiendo las políticas del capitalismo racista y patriarcal, y reclaman la solidaridad de los pueblos del continente, para poner freno a las políticas de represión y muerte, y garantizar las condiciones que permitan abrir los caminos de creación de una nueva sociedad, en la que todos los compañeros y compañeras caídas en la lucha contra el golpe de estado, y en la defensa de cada uno de los derechos del pueblo, encuentren su lugar. En nuestra memoria, en nuestra capacidad de continuar la lucha, y en las posibilidades de refundar un sueño colectivo. 

*Consejo Cívico de Organizaciones Populares
e Indígenas de Honduras (COPINH)*


El cambio climático... *viene de la página 13*

con el cambio climático, elaborados por los gobiernos centroamericanos, "solo en siete se identificaron responsabilidades y recursos para su implementación".

Importantes como son para atender las consecuencias del desastre, los planes de atención de emergencias y las políticas de coordinación regional -por ahora, plasmadas solo en el papel- no constituyen una respuesta estratégica e integral de largo plazo. En este sentido, una de las valoraciones que realiza el Informe no admite dudas: **"Centroamérica es un ejemplo claro -aunque no exclusivo en el mundo- de la desvinculación entre ambiente y desarrollo"**.

Lo que se requiere, entonces, es un cambio radical en la cultura ambiental y económica,

en nuestro modo de concebir el "desarrollo" y nuestra relación con el medio ambiente, regida durante siglos por la pretensión del dominio humano sobre la naturaleza, su explotación irracional con afán de lucro, la subordinación de las decisiones al cálculo de utilidades, y la sistemática deslegitimación de las propuestas o alternativas al modelo dominante por considerar que *se oponen al progreso*.

Es una tarea mayúscula, como el tamaño de los desafíos a los que nos enfrentamos, y en la que la clase política y las sociedades centroamericanas, en su conjunto, tienen todavía una enorme deuda pendiente con su futuro y las posibilidades de vida en la región. 

Referencia:
Programa Estado de la Nación. 2011. **Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible**. San José, Programa Estado de la Nación. <http://www.estadonacion.or.cr/index.php/biblioteca-virtual/centroamerica>



AMERICA LATINA en movimiento

revista mensual

ACTUALIDAD Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO

- Realidad Regional
- Procesos Sociales
- Problemáticas Contemporáneas

Un esfuerzo conjunto de analistas y pensadores destacados, organizaciones sociales y ciudadanas, escritores y comunicadores comprometidos con las causas sociales.

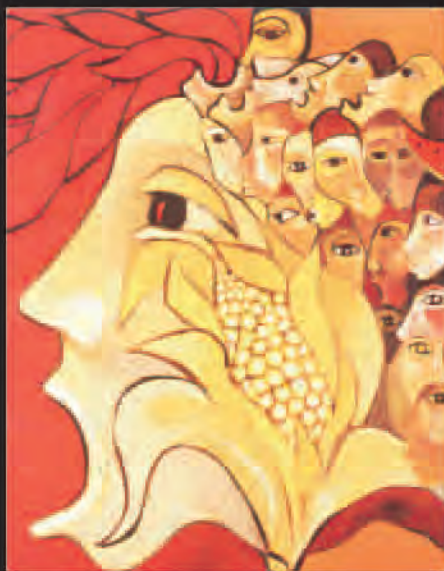
Fuente de información imprescindible para líderes de opinión, dirigentes sociales, activistas políticos, centros de estudios y formación, periodistas y medios de comunicación, organismos de desarrollo...

¡SUSCRIBETE!

Una prensa independiente depende de los aportes de sus lectores
info@alainet.org • www.alainet.org/revista.phtml

El Grito de los Excluidos/as llama a los movimientos sociales y en especial a las organizaciones de migrantes e interesadas en la lucha a favor de los y las migrantes, a sumarse a las acciones en el marco del **Día Internacional del Migrante**, el próximo 16 de diciembre. Esta fecha nos recuerda que en el mundo existen más de 200 millones de seres humanos migrantes cuyos derechos, en la mayor parte de los casos, son violados y negados por gobiernos, empresas y por las mismas sociedades de destino, situación que debe cambiar YA! Por una CIUDADANIA UNIVERSAL y el pleno respeto a los derechos humanos de los y las migrantes!

Grito de los Excluidos/as Continental - www.gritodelosexcluidos.org
Grito de los Excluidos/as Mesoamericano - www.gritomesoamerica.org/



ALAI • casilla 17-12-877, Quito, Ecuador • email: info@alainet.org • www.alainet.org